



**Universitat Autònoma  
de Barcelona**

**Trabajo de fin de grado**

---

**El embargo de sueldos y pensiones**

**Alumna:** Noelia Albarrán Villegas

**Director:** Manuel-Jesús Cachón Cadenas

**Curso:** 5º del Doble Grado de Derecho y Relaciones Laborales

**Fecha de entrega:** 7 de mayo de 2019

*A mi director, el Dr. Manuel Cachón Cadenas por su atención y sus buenos consejos para la realización de este trabajo de final de grado y, en especial, a mi familia: mis padres, a David y a Miriam, por depositar su confianza en mi y apoyarme siempre en todo.*

### **Abreviaturas**

- ◆ Art[s].: Artículo[s]
- ◆ AAP: Auto de la Audiencia Provincial
- ◆ AA.VV.: Autores varios
- ◆ CC: Código Civil
- ◆ CE: Constitución Española
- ◆ Cit.: Citado
- ◆ Dir.: Director
- ◆ Ed.: Editorial
- ◆ Etc.: Etcétera
- ◆ FOGASA: Fondo de Garantía Salarial
- ◆ IPC: Índice de Precios del Consumo
- ◆ LEC: Ley Enjuiciamiento Civil
- ◆ LGSS: Ley General de la Seguridad Social
- ◆ LGT: Ley General Tributaria
- ◆ LRJS: Ley reguladora de la Jurisdicción Social
- ◆ N°.: Número
- ◆ OIT: Organización Internacional del Trabajo
- ◆ P[p].: Página[s]
- ◆ RDL: Real Decreto Ley
- ◆ Rec.: Recurso
- ◆ SMI: Salario Mínimo Interprofesional
- ◆ STC: Sentencia del Tribunal Constitucional
- ◆ SAN: Sentencia de la Audiencia Nacional
- ◆ TC: Tribunal Constitucional
- ◆ TRLET: Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores

## **Resumen**

El ordenamiento jurídico español, atendiendo a la función económico-social de sustentación habitual de gran parte de la población por parte del salario, ha establecido como medida de protección su inembargabilidad relativa hasta el límite de la cuantía prevista para el Salario Mínimo Interprofesional. Sin embargo, cuando acudimos a las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, podemos ver que no solamente se protege el salario, sino que se amplía a diversas retribuciones, entre ellas, las pensiones.

Además, en determinadas ocasiones, las cantidades inembargables podrán ser superiores a la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional y, en otras, las cuantías embargables serán fijadas por el propio juez. De esta forma, en la práctica habitual de la traba de estas figuras, surgirán diversos problemas que serán objeto de trato en el presente trabajo.

## **Palabras clave**

Salario – Pensiones – Retribuciones – Embargo – Embargo de sueldos y pensiones  
– Salario Mínimo Interprofesional – Ley de Enjuiciamiento Civil

## **Índice**

1.	Introducción .....	6
2.	Objetivos y metodología .....	6
3.	El salario .....	8
3.1.	Concepto .....	8
3.2.	Función .....	9
3.3.	Modalidades de salario .....	10
3.4.	Estructura salarial .....	11
3.5.	Salario mínimo interprofesional .....	12
4.	Pensiones .....	15
4.1.	Concepto y características .....	15
4.2.	Clases .....	17
5.	Embargo .....	17
5.1.	Concepto, regulación y función .....	17
5.2.	Los bienes susceptibles de embargo .....	22
5.3.	Concreción del objeto del embargo. ....	24
6.	El embargo de sueldos, salarios y pensiones .....	29
6.1.	La protección de las retribuciones .....	29
6.2.	Alcance de la inembargabilidad .....	33
7.	Problemas del embargo de sueldos, salarios y pensiones .....	37
7.1.	Determinación de los ingresos incluidos y excluidos del ámbito del embargo .....	37
7.2.	La naturaleza de los ingresos existentes en la cuanta bancaria en que el ejecutado ha domiciliado su nómina o percibe su pensión .....	41
8.	Determinación de la cuantía embargable .....	43

9. Modificación de los porcentajes .....	49
10. La concurrencia de embargos y el reembolso .....	54
11. Extinción del embargo y casos de sustitución del embargo .....	56
12. El incumplimiento por parte del pagador de su deber de retener el sueldo del ejecutado .....	60
13. Tercería de mejor derecho sobre el embargo de sueldos, salarios y pensiones.....	62
14. Conclusiones.....	62
15. Bibliografía .....	65
16. Jurisprudencia .....	67

## **1. Introducción**

En nuestro ordenamiento jurídico, el art. 1.911 CC fija la responsabilidad universal del deudor, basándose en la idea de que los ciudadanos hemos de responder a nuestras obligaciones con nuestros bienes presentes y futuros. De esta forma, nuestro patrimonio puede estar formado por una multitud de diferentes bienes y derechos, pero, es muy probable que en el patrimonio de la gran parte de ciudadanos encontremos como su medio de subsistencia habitual un sueldo. Sin embargo, es posible que una parte de la población no pueda trabajar o que trabaje, pero que, por alguna circunstancia, cobren una pensión.

Esta función de sustentación social de la gran parte de la población por parte del salario y la pensión es tan importante que nuestro ordenamiento jurídico les ha concedido un tratamiento mucho “más atento y detallado” a diferencia de otras prestaciones dinerarias derivadas de otras figuras contractuales. El legislador ha introducido determinados dispositivos de protección a esas remuneraciones, siendo uno de los más importantes la condición de inembargabilidad recogida de forma conjunta en el art. 607 LEC y en el art. 27.2 TRLET.

Según veremos, la inembargabilidad de las retribuciones no se trata de una inembargabilidad absoluta, sino limitada a la cuantía del SMI aplicándose a los excesos sobre tal importe una escala progresiva de porcentajes de embargabilidad recogida en el art. 607.2 LEC. No obstante, la práctica de la traba de estas figuras provocará una multitud de problemas que serán objeto de análisis en el presente trabajo.

## **2. Objetivos y metodología**

El objetivo fundamental de este trabajo es ofrecer una visión lo más completa posible sobre el embargo de sueldos y pensiones. De forma relacionada, los objetivos específicos propuestos son:

- 1- Conocer el concepto de salario y su función económico-social, las modalidades de sueldo y su estructura para poder diferenciar más tarde que partes del mismo se encuentran protegidas y cuáles no. Además, de realizar

un análisis especial a la figura del SMI, dada su relevancia como medida de referencia utilizada para el cálculo de la cuantía embargable.

- 2- Comprender el concepto de pensiones, determinar sus características y distinguir las diferentes clases pensiones dentro del sistema de Seguridad Social español con el objetivo de entender qué es lo que se embarga cuando se procede al embargo de una pensión.
- 3- Analizar las medidas de protección otorgadas por el ordenamiento jurídico español entorno al salario y a las pensiones, así como realizar un estudio a los problemas planteados en la práctica del embargo de sueldos y pensiones.

Respecto la metodología utilizada para elaborar el presente trabajo es esencialmente jurídica, por lo que consecuentemente se analizarán textos normativos y jurisprudenciales con el apoyo de material bibliográfico como soporte interpretativo.

El primer bloque que encontramos en el trabajo es el del salario, ya que, para poder lograr un mayor entendimiento de la dinámica del proceso del embargo de sueldos y pensiones, es necesario aclarar qué es lo que se entiende por salario y qué elementos conforman la figura. A la vez, se hace referencia a la función que ejerce dentro de nuestro ordenamiento jurídico con el objetivo de poder comprender la protección jurídica que se le otorga. Posteriormente, se alude a las diferentes modalidades de retribución del salario y a los diversos elementos que configuran el salario. Por último, se hace una especial mención al SMI debido a que en el proceso del embargo de sueldos y pensiones adquiere una especial relevancia.

El segundo bloque, de la misma forma que el anterior, se trata de la conceptualización de las pensiones. En el primer apartado se hace referencia al concepto de pensión y sus características, con el objetivo de poder determinar qué es lo que se entiende cuando hablamos de ella, mientras que, en el segundo



apartado, se establece una sintética diferenciación de las clases de pensiones que podemos encontrar en el sistema de Seguridad Social español.

El tercer bloque trata sobre el embargo de forma generalizada, sirviendo el primer apartado para determinar el concepto de embargo y, a su vez, su función y dónde se presenta su regulación, con el objetivo de saber en qué momento de la ejecución nos encontramos. Más tarde, se determinarán cuáles son los bienes susceptibles de embargo y cómo se concreta ese bien que será objeto del embargo.

El cuarto bloque ya se centra en el objeto de análisis del presente trabajo: el embargo de sueldos y pensiones. Primero, se hará referencia a la protección de las retribuciones que brinda nuestro ordenamiento jurídico. Acto seguido, se determinará el alcance de la inembargabilidad de los sueldos y pensiones. Seguidamente, se tratarán los problemas que suscita el embargo de estas retribuciones y se determinará la cuantía líquida procedente a embargar. Más tarde, se tratarán las posibles modificaciones a los porcentajes de embargabilidad y la concurrencia de diversos embargos. Posteriormente, se hablará sobre la extinción del embargo y a los posibles casos de sustitución, así como el incumplimiento por parte del pagador de su deber de retener el sueldo del ejecutado. Por último, se hará referencia a la tercería de mejor derecho.

### **3. El salario**

#### **3.1. Concepto**

La definición del concepto de salario se establece en el art. 26.1 del TRLET y establece que “se considerará salario a la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, ya sea en dinero o en especie, por la prestación de unos servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los periodos de descanso computables como de trabajo”.

De la anterior definición se desprende, tal y como señala Magdalena Llompart Bennàssar, la íntima conexión entre el salario y el trabajo por cuenta ajena. El salario surge de la obligación del empleador de retribuir la prestación de servicios

por parte del trabajador realizados por cuenta ajena, en régimen de dependencia, ajenidad y subordinación<sup>1</sup>.

Además, el salario se subsume en una relación de reciprocidad, en la cual las partes son deudoras recíprocamente, ya que el empresario deviene acreedor de los servicios prestados por el trabajador, y a la vez, deudor de la retribución del trabajador, mientras que el trabajador, por su parte, es deudor de los servicios que se ha comprometido a desempeñar en su contrato de trabajo, pero a la vez acreedor de la compensación económica.

### 3.2. Función

El salario es una contraprestación dineraria que se configura como el medio de subsistencia habitual de grandes masas de población<sup>2</sup>. De esta forma, el ordenamiento jurídico le concede una protección mayor que a otras contraprestaciones dinerarias propias de otras figuras contractuales, ya que se configura como medio fundamental, no obstante, no el único, con el que la mayoría de los ciudadanos cuentan para satisfacer sus necesidades<sup>3</sup>. Por lo tanto, según Alfredo Montoya Melgar, el salario realiza una doble función jurídica, por un lado, adquiere una función jurídico-contractual, ya que “retribuye o compensa el servicio u obra realizados por el trabajador por cuenta ajena”, y por otro lado, tiene una función económico-social de “sustentación del trabajador”, reconociendo el art. 35.1 CE el derecho de los trabajadores a una remuneración económica suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Así, el “derecho tiende a garantizarlo a través de diversos mecanismos como la fijación de salarios mínimos, la inembargabilidad del salario, el carácter de crédito privilegiado, etc.”<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> LLOMPART BENNÀSSAR, Magdalena, *El salario: concepto, estructura y cuantía*, Ed. La Ley, 1ª edición, 2007, p. 195.

<sup>2</sup> PEDRAJAS MORENO, Abdón, *El embargo sobre retribuciones (su práctica y sus límites)*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, p. 15.

<sup>3</sup> PEDRAJAS MORENO, Abdón, *El embargo sobre retribuciones (su práctica y sus límites)*, cit., p. 15.

<sup>4</sup> MONTOYA MELGAR, Alfredo, *Derecho del Trabajo*, Ed. Tecnos, 18ª edición, 1997, pp. 371-372. También, PEDRAJAS MORENO, Abdón. *El embargo sobre retribuciones (su práctica y sus límites)*, cit., p. 16.

### 3.3. Modalidades de salario

Con arreglo a la definición del concepto de salario del art. 26.1 TRLET que anteriormente se ha señalado, se desprende que existen dos modalidades de retribución del salario: el salario en dinero y el salario en especie.

Por un lado, respecto el salario en dinero o en metálico, según lo que determina el art. 29.4 TRLET el empresario podrá efectuar el pago del salario “en moneda de curso legal o mediante cheque u otra modalidad de pago similar a través de entidades de crédito”, de esta forma, el salario consiste en una cantidad de dinero, que comprende el dinero bancario, cheques, talones y similares. Por otro lado, la retribución en especie se define como la parte de la prestación retributiva que se paga mediante un bien distinto del dinerario y que puede referirse a la utilización, consumo y adquisición de servicios, bienes o derechos susceptibles de valoración económica, siempre que resulten adecuados y provechosos para el trabajador, incluso cuando no supongan un gasto real para el empresario<sup>5</sup>.

Esta modalidad salarial debe comportar un incremento patrimonial del trabajador, es decir, debe suponer una satisfacción total o parcial de un consumo que de otra forma, el trabajador hubiera podido procurarse a sus propias expensas, por lo tanto, no supone de forma necesaria, la adquisición de la propiedad de un bien, sino que puede consistir en un mero derecho a usar o disfrutar de un bien que se incorpora en al patrimonio jurídico del trabajador y, que en consecuencia, cuenta con utilidad económica para él. Algunos ejemplos son: la utilización de la vivienda por razón de cargo o por la condición de empleado público o privado, la utilización o entrega de automóviles, prestamos con tipos de interés inferiores al legal del dinero, etc.

Actualmente, esta modalidad salarial está restringida a unos determinados sectores tradicionales, como puede ser la minería, la electricidad, el suministro de aguas,

---

<sup>5</sup> LLOMPART BENNÀSSAR, Magdalena, *El salario: concepto, estructura y cuantía*, cit., p. 204. También, art. 23.1B.a) Real Decreto 2064/1995 de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, en la redacción del Real Decreto 637/2014 de 25 de julio por el que se modifica el art. 23 del anterior reglamento.

entre otros, pero en el plano de la negociación individual está cogiendo auge en el personal de alta dirección.

### 3.4. Estructura salarial

La estructura salarial es el conjunto de componentes que integran la retribución que percibe el trabajador por la prestación de servicios. Según el art. 26.3 TRLET, la estructura del salario está formada por el salario base y los complementos salariales.

El salario base es la retribución fijada por unidad de tiempo o de obra, de esta forma, según José Luís Monereo Pérez podría definirse como “la parte de la retribución ligada en forma global y abstracta a la prestación laboral del trabajador sin referencia alguna a las circunstancias en la que la prestación se realiza”<sup>6</sup>. Así, los parámetros de referencia de fijación del salario base son fundamentalmente las funciones que desempeña y la jornada ordinaria<sup>7</sup>.

A diferencia de los complementos salariales que se vinculan a circunstancias especiales relativas al propio empleado, al trabajo realizado y a la empresa. Pueden ser definidos como “remuneraciones que se caracterizan, porque, siendo su razón de ser el trabajo, concurre en él alguna concausa merecedora de una conceptualización diferente del trabajo corriente, que además es la que se usa normalmente para denominar la retribución de que se trate”<sup>8</sup>. De esta forma, los complementos salariales tienen un carácter contingente, ya que dependen de las circunstancias que sucedan durante la prestación de servicios. El art. 26.3 TRLET establece que hay tres tipos de complementos salariales: los complementos salariales en función de las condiciones personales del trabajador, los relativos a la prestación de servicios como tal y los correspondientes a la situación o resultados de la empresa.

En cuanto a las gratificaciones extraordinarias, es fundamental señalar que se regulan en el art. 31 TRLET, el cual establece que “el trabajador tiene derecho a

---

<sup>6</sup> LLOMPART BENNÀSSAR, Magdalena, *El salario: concepto, estructura y cuantía*, cit., p. 377.

<sup>7</sup> LLOMPART BENNÀSSAR, Magdalena, *El salario: concepto, estructura y cuantía*, cit., p. 377.

<sup>8</sup> LLOMPART BENNÀSSAR, Magdalena, *El salario: concepto, estructura y cuantía*, cit., p. 386.

dos gratificaciones extraordinarias al año”. Se trata, entonces, de dos pagas al año, como mínimo, una de ellas con ocasión de las fiestas Navidad y la otra en el mes que se fije en el Convenio Colectivo correspondiente aplicable o mediante acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores. La cuantía de éstas también será fijada mediante convenio colectivo.

Por último, respecto a los complementos extrasalariales, es necesario señalar que el art. 26.2 TRLET determina que “no tendrán la consideración de salario las cantidades percibidas por el trabajador en concepto de indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como consecuencia de su actividad laboral, las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social y las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.” Según Antonio Martín Valverde, el citado artículo añade una precisión de carácter negativo, por la que excluye del concepto de salario determinadas cantidades que, recibidas por el trabajador en el marco de la relación de trabajo o como consecuencia de ella, no pueden ser calificadas como salario al faltarles el carácter de contraprestación por los servicios realizados<sup>9</sup>. Tal y como establece el art. 26.2 TRLET, existen tres tipos de complementos extrasalariales: las indemnizaciones o suplidos ocasionados por el trabajo, las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social y las indemnizaciones por traslados, suspensiones o despidos.

### 3.5. Salario mínimo interprofesional

En España, a diferencia de otros países de derecho comparado<sup>10</sup>, la figura del SMI, no se encuentra regulado en nuestra Constitución, sin embargo, el art. 35.1 CE determina que “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de la profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”.

---

<sup>9</sup> MARTÍN VALVERDE, Antonio, RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, Fermín y GARCÍA MURCIA, Joaquín, *Derecho del Trabajo*, Ed. Tecnos, Vigésimoprimera Edición, Madrid, 2012, p. 636-637.

<sup>10</sup> Por ejemplo, la Constitución de la República Portuguesa de 1976 en su art. 54.a) establece esta figura como un derecho de los trabajadores.

De esta forma, Sagardoy determina que el SMI se trataría de uno de los medios que actualmente recoge la legislación vigente para alcanzar el objetivo constitucional<sup>11</sup>.

Esta figura se encuentra regulada en nuestro ordenamiento jurídico en el art. 27 TRLET y se describe como “la retribución mínima que ha de percibir un trabajador por su jornada legal de trabajo, con independencia del sector económico, tipo de contrato, nivel de cualificación, lugar de residencia y cualesquiera otras características personales como el sexo, la edad, etc”. El SMI se entiende que ha sido fijado para la jornada legal en cada actividad, por lo que, en caso de jornadas inferiores, el trabajador tiene derecho a recibir una retribución proporcional a la jornada que desempeña<sup>12</sup>.

Es un instrumento que utilizan los poderes públicos para garantizar un salario justo, ya que, conforme lo establecido en el art. 27 TRLET, el Gobierno fijará anualmente el salario mínimo por el cual se podrá pactar la contraprestación de servicios por cuenta ajena. Se configura, por tanto, como límite a la libertad de fijación del salario, siendo el suelo mínimo de contratación, por debajo del cual resulta ilegal la contratación de prestación de servicios<sup>13</sup>. Este instrumento es una garantía de ingresos mínimos que asegura un nivel mínimo de subsistencia<sup>14</sup>.

Según el art. 27 TRLET, la fijación del SMI se realiza mediante la suma e incidencia de una serie de factores como puede ser el IPC, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la

---

<sup>11</sup> SAGAROY BENGOCHEA, Juan Antonio, “Salario mínimo interprofesional” en AA.VV. *Comentarios a las Leyes Laborales. El Estatuto de los Trabajadores*, de BORRAJO DACRUZ, Efren (dir.), Ed. Edersa, Tomo VI, Madrid, 1982. pp. 110-111.

<sup>12</sup> LÓPEZ AMEZUA, Javier, “Salario Mínimo Interprofesional”, Trabajo de Fin de Grado, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Valladolid, Valladolid, 2016, p. 9. Consultado en: <https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/21560/1/TFG-E-233.pdf> (última vez visitado: 26 de marzo de 2019).

<sup>13</sup> Respuesta del Gobierno a la pregunta escrita al Congreso 184/25630 por CAMPUZAN I CANADÉS, Carles, en fecha 9 de enero de 2018. Consultado en: [http://www.congreso.es/l12p/e7/e\\_0079220\\_n\\_000.pdf](http://www.congreso.es/l12p/e7/e_0079220_n_000.pdf) (última vez visitado: 26 de marzo de 2019).

<sup>14</sup> LLOMPART BENNÀSSAR, Magdalena, *El salario: concepto, estructura y cuantía*, cit., p. 526.

coyuntura económica general. Sin embargo, según establecen algunos autores como Fernando Valdés Dal-Ré, el criterio mayormente utilizado es la evolución del IPC<sup>15</sup>. No obstante, el art. citado anteriormente, contempla, además, la previsión de una revisión semestral para el caso de que no se cumplan las previsiones sobre el IPC.

Las funciones que tiene este instrumento son diversas, por ejemplo, determina el alcance de otros derechos laborales de los trabajadores, como puede ser la inembargabilidad salarial que se establece en el art. 27.2 TRLET o el límite de responsabilidad del FOGASA, entre otros<sup>16</sup>.

Actualmente, el art.1 del Real Decreto 1462/2018 de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019, establece que el SMI para 2019 queda fijado en 30 euros/día o 900 euros/mes según que el salario sea fijado por días o por meses, resultando un SMI anual de 12.600 euros por 14 pagas. Se trata de un incremento del 22,3% respecto las cuantías fijadas en el año anterior que ascendían a 24,53 euros/día o 735,90 euros/mes y resultando una SMI anual de 10.302,60 euros por 14 pagas. Este incremento se encuentra fundamentado en la toma en consideración de forma conjunta de los factores contemplados en el art. 27.1 TRLET y en la mejora de las condiciones generales de la economía, con el objetivo de prevenir la pobreza en el trabajo u fomentar un crecimiento salarial general más dinámico y cumplir con el mandato constitucional de reconocer a los trabajadores una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida satisfactorio<sup>17</sup>.

Por otro lado, el art. 27.2 TRLET y de forma semejante el art. 607.1 LEC atribuyen a la figura del SMI una protección especial, que es la inembargabilidad. En los

---

<sup>15</sup> VALDÉS DAL-RÉ, Fernando, “El salario mínimo interprofesional y la igualdad de remuneración por razón de sexo (en torno a los artículos 27 y 28)”, en *REDT*, núm. 100, 2000. p. 641.

<sup>16</sup> LLOMPART BENNÀSSAR, Magdalena, *El salario: concepto, estructura y cuantía*. cit., p. 527.

<sup>17</sup> Véase: Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019.

citados artículos se establece que el salario que no exceda de la cuantía señalada para el SMI es inembargable. De esta forma, si el salario que percibe el trabajador excede de esa cuantía será embargable de forma proporcional a la escala de tramos que se establece en el art. 607.2 LEC y, que más tarde se hará referencia.

## **4. Pensiones**

### **4.1. Concepto y características**

En un sentido amplio, por prestaciones de la Seguridad Social cabe entender “un conjunto de medidas técnicas o económicas que pone en funcionamiento la Seguridad Social para prever, reparar o superar los estados de necesidad derivados de la actuación de ciertas contingencias”<sup>18</sup>. Unas compensan el aumento de gastos y otras la disminución de ingresos<sup>19</sup>. En la modalidad contributiva las prestaciones económicas cumplen una función de sustitución de las rentas de activo, situándose el ideal de cobertura en plenitud de sustitución, mientras que, en la modalidad no contributiva, la función es garantizar un mínimo de subsistencia<sup>20</sup>.

Estas prestaciones se caracterizan por ser<sup>21</sup>:

- Indisponibles. De acuerdo con el art. 40.1 de la LGSS, las prestaciones de la Seguridad Social, así como los beneficios de sus servicios sociales y de la asistencia social, no podrán ser objeto de retención, cesión total o parcial, compensación o descuento salvo en orden de cumplimiento de las obligaciones alimenticias a favor del cónyuge e hijos o cuando se trate de obligaciones contraídas por el beneficiario dentro de la Seguridad Social.

---

<sup>18</sup> BENAVIDES VICO, Antonio, *Manual Práctico de Seguridad Social*, Asepeyo, Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya, Volumen I, Barcelona, 2003, p. 299.

<sup>19</sup> GARCÍA ORTEGA, Jesús, “Acción protectora: las prestaciones y su régimen jurídico” en AAVV, *Derecho de la Seguridad Social*, de Roqueta Buj, Remedios y García Ortega, Jesús (dir.), Ed. Tirant lo Blanch, 7ª edición, Valencia, 2018, p. 203.

<sup>20</sup> GARCÍA ORTEGA, Jesús, “Acción protectora: las prestaciones y su régimen jurídico” en AAVV, *Derecho de la Seguridad Social*, cit., p. 203.

<sup>21</sup> BENAVIDES VICO, Antonio, *Manual Práctico de Seguridad Social*, Asepeyo, Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya, Volumen I, Barcelona, 2003, p. 299.



Por otro lado, este mismo artículo establece que las prestaciones de la Seguridad Social son inembargables de acuerdo con lo establecido en los art. 605 y siguientes de la LEC.

- Están sujetas a tributación. De acuerdo con el art. 40.2 LGSS, las prestaciones derivadas de la acción protectora de la Seguridad Social estarán sujetas a tributación en los términos establecidos en las normas reguladoras de cada impuesto.
- Irrenunciables. Las prestaciones otorgadas por la Seguridad Social a las que tenga derecho el beneficiario son irrenunciables, salvo en casos de opción.
- Incompatibles. El art. 122 LGSS determina que las prestaciones del Régimen General serán incompatibles entre sí cuando coincidan en un mismo beneficiario, a no ser que se disponga lo contrario legal o reglamentariamente, por lo que, en caso de incompatibilidad, el beneficiario con derecho a dos o más pensiones optará por una de ellas. No obstante, se exceptúa de la incompatibilidad la pensión de viudedad y orfandad.

En cuanto a la compatibilidad de las pensiones junto con el trabajo, es necesario señalar que la pensión de jubilación es incompatible con todo trabajo del pensionista por cuenta ajena o propia que dé lugar a la inclusión en alguno de los Regímenes que integran el Sistema de la Seguridad Social. Es incompatible, también, con el trabajo por cuenta ajena o propia la incapacidad temporal, la maternidad y el riesgo durante el embarazo, ésta última, salvo algunos supuestos de pluriempleo o pluriactividad. En principio, todos los pensionistas de invalidez permanente pueden trabajar en actividades compatibles con su estado. Por último, los subsidios y pensiones en favor de familiares son también incompatibles con el trabajo.

#### 4.2. Clases

La modalidad contributiva se trata de pensiones financiadas básicamente mediante las cuotas de las personas obligadas, mientras que las pensiones de la modalidad no contributiva se financian mediante las aportaciones del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social. De esta forma, en cuanto a la modalidad contributiva se incluyen las pensiones por jubilación ya sea ordinaria o anticipada y sus subsiguientes categorías, por incapacidad permanente, ya sea total, absoluta o gran invalidez y por fallecimiento: la pensión de viudedad, la pensión de orfandad y las pensiones y subsidios en favor de familiares. Dentro de la acción protectora del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez se incluyen las pensiones de vejez, invalidez y viudedad. Por otro lado, respecto a las pensiones no contributivas se puede encontrar la pensión de invalidez y la pensión de jubilación.

### 5. Embargo

#### 5.1. Concepto, regulación y función

Para empezar, el concepto “embargo” es definido por el Diccionario de la Lengua Española como “retención, traba o secuestro de bienes por mandamiento de juez o autoridad competente”<sup>22</sup>. Se trata de una expresión usual en el lenguaje jurídico actual. No obstante, resulta difícil determinar la procedencia etimológica de tal vocablo, ya que, en el latín clásico no había ninguna palabra que pudiera establecer una relación directa de derivación etimológica. Sin embargo, más tarde, en el latín bajo o tardío, apareció el verbo *imbarricare*, el cual parece ser el origen inmediato de la expresión “embargo” que utilizamos actualmente. Se trataba de un verbo polivalente, el cual poseía una pluralidad de significados, como impedir, estorbar, obstaculizar y embarazar<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Real Academia Española, Diccionario online. Consultado en: <https://dle.rae.es/?id=Eb66WoQ> (última vez visitado: 26 de marzo de 2019).

<sup>23</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, *El embargo*, Librería Bosch, primera edición, Barcelona, febrero, 1991, p. 22.

De forma posterior, en la Edad Media, el vocablo “embargar” y “embargo” empieza a recogerse en algunos textos legales, como el Código de las Siete Partidas<sup>24</sup>, concretamente en la Tercera Partida, Título 8, en la Ley 3 y 4, pero con un significado más genérico referido a “impedir” o “estorbar” una acción. No obstante, para poder encontrar una referencia más técnico-jurídica del concepto, como actualmente se utiliza, entendiendo el embargo como “la retención judicial de un bien para sujetarlo a las resultas de un proceso<sup>25</sup>”, es necesario ir más allá de la promulgación del Código de las Siete Partidas, hacia el periodo recopilador, donde la Nueva como la Novísima Recopilación hace referencia ya al término embargo con la perspectiva actual moderna<sup>26</sup>, si bien, todavía persiste en algunos textos la utilización del término embargo con significados más genéricos<sup>27</sup>. Más tarde, será trasladado a los textos decimonónicos y en la legislación posterior.

No obstante, en ningún texto se contendrá una definición expresa del término embargo, tradición que sigue nuestro derecho positivo español actual. Tal y como señala Manuel Cachón Cadenas, el término embargo está presente en una diversidad de procesos, muy distintos entre sí, de esta forma, la falta de una definición legal entraña la ventaja de evitar que la noción de embargo quedara acotada dentro de unos límites tan rígidos que imposibilitaran su adaptación a las particulares modificaciones introducidas en cada uno de aquellos procesos<sup>28</sup>. Sin embargo, esto se convierte en un problema, debido a que distintas realidades se encuadran dentro de un mismo concepto de embargo, provocando que este concepto

---

<sup>24</sup> Se trata de un cuerpo normativo redactado en la Corona de Castilla durante el reinado de Alfonso X (1252-1284) con el objetivo de conseguir una uniformidad jurídica del reino. Está conformado por un prólogo, que señala el objeto de la obra y siete libros llamados partidas. Estas últimas, se dividen por títulos y estos, en leyes. Se trata de un Código muy extenso que regula una variedad de materias, tanto de derecho público como de derecho privado.

<sup>25</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, *El embargo*. cit., p. 23. A su vez, CACHÓN CADENAS, Manuel, *La ejecución procesal civil*, Ed. Atelier, segunda edición, Barcelona, 2018, p. 109.

<sup>26</sup> Algún ejemplo se encuentra en la Ley 27 del Título 21 del Libro 4º o las Leyes 5 y 6 del Título 17 del Libro 5º de la Nueva Recopilación y las Leyes 12, 13, 18 y 19 del Título 31 del Libro 11º.

<sup>27</sup> Como la Ley 1 del Título 11 del Libro 4º de la Nueva Recopilación o la Ley 1 del Título 5 del Libro 11º de la Novísima Recopilación.

<sup>28</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, *El embargo*. cit., p. 24.

vago y polivalente sea incompatible con la necesaria claridad y precisión de las normas legales. De esta forma, es posible ver que la LEC alude innumerables veces al concepto de embargo, pero muchas de ellas de forma contradictoria y confusa entre ellas<sup>29</sup>. Así, es posible señalar que el concepto de embargo presenta una gran relevancia jurídica, ya que se presentan innumerables problemas<sup>30</sup> cuya solución se encuentra en una clara definición del concepto.

De este modo, para proceder a un análisis del embargo de sueldos, salarios y pensiones, es necesario realizar algunas presiones terminológicas y conceptuales del embargo ejecutivo civil de forma general para poder comprender su alcance.

En nuestro ordenamiento jurídico nos encontramos que la Ley 1/2000, de 7 enero, de Enjuiciamiento Civil contiene en el Libro III que lleva por rúbrica “De la ejecución forzosa y las medidas cautelares” concretamente desde los arts. 517 a 720 la del régimen de ejecución forzosa. En los primeros cinco Títulos del Libro Tercero se contiene un desarrollo de los títulos ejecutivos, la ejecución provisional, las disposiciones generales de la ejecución, la ejecución dineraria y la ejecución no dineraria. Por último, en el Título Sexto, de los artículos 721 a 747 LEC, que da cierre al Libro III, se regulan las medidas cautelares con el objetivo de asegurar la efectividad de la sentencia futura.

El embargo ejecutivo requiere que previamente se haya despachado a ejecución y es el primer paso de la ejecución forzosa, y tal como establece Víctor Moreno Catena, mediante esta figura se individualizan bienes de contenido patrimonial en el patrimonio de deudor para cubrir la responsabilidad por la que se ha despachado a ejecución, ya sea, mediante dinero por haberse encontrado en el patrimonio del deudor o la realización de otros elementos patrimoniales susceptibles de convertirse en dinero<sup>31</sup>.

---

<sup>29</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, *El embargo*. cit., p. 24.

<sup>30</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, *El embargo*, cit., p. 24.

<sup>31</sup> MORENO CATENA, Víctor Manuel, “Aspectos más relevantes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento civil en las modificaciones de 2009”, en *Estudios Jurídicos*, 2010, pp. 217-218.

La doctrina española ha sido prolífica en materia de definiciones de la institución del embargo ejecutivo provocado por la inexistencia de la misma, de esta forma, Jaime Guasp Delgado define el embargo como “toda afectación de bienes a un proceso con la finalidad de proporcionar al juez los medios necesarios para llevar al normal término una ejecución procesal”<sup>32</sup>, Jorge Carreras Llansana como “por embargo entendemos aquella actividad procesal compleja llevada a cabo en el proceso de ejecución, enderezada a elegir los bienes del ejecutado que deben sujetarse a la ejecución y a afectarlos concretamente a ella, engendrando en el acreedor ejecutante una facultad meramente procesal a percibir el producto de la realización de los bienes afectados, y sin que se limite jurídicamente ni se expropie la facultad de disposición del ejecutado sobre dichos bienes”<sup>33</sup> o Manuel Cachón Cadenas como “el embargo es una actividad jurisdiccional que constituye uno de los actos fundamentales de proceso de ejecución pecuniaria y que consiste en una declaración de voluntad mediante la cual determinados bienes, que se consideran pertenecientes al ejecutado, se afectan o adscriben a la actividad de apremio que ha de realizarse en el mismo proceso de ejecución del que forma parte el embargo”<sup>34</sup>.

Los particulares cuando renuncian a la autotutela en favor de la función jurisdiccional, lleva a que el ordenamiento proporcione la satisfacción de las peticiones de tutela jurídica en situaciones individualizadas mediante la aplicación del derecho por parte de jueces y tribunales encargados, y, a su vez, es necesario que se prevean mecanismos para la adecuación del mundo físico a las declaraciones judiciales efectuadas, cuando los particulares no asumen voluntariamente el comportamiento que se les impone a las mismas. De esta forma, el art. 117.3 CE expresa esta realidad mediante la atribución de forma exclusiva de la potestad jurisdiccional consistente en juzgar y ejecutar lo juzgado a los juzgados y

---

<sup>32</sup> GUASP DELGADO, Jaime y ARAGONESES ALONSO, Pedro, *Derecho procesal civil. Tomo II: Parte Especial: procesos declarativos y de ejecución*, Ed, Civitas, Madrid, 2006, p. 621.

<sup>33</sup> CARRERAS LLANSANA, Jorge, *El Embargo de bienes*, Ed. Bosch, Barcelona, 1957, p. 138.

<sup>34</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, *El embargo*, cit., pp. 26-29. A su vez, CACHÓN CADENAS, Manuel, *La ejecución procesal civil*, cit., p. 109.

tribunales, en idénticos términos en los que se pronuncia la Ley Orgánica del Poder Judicial en su art. 2.1.

Cuando el deudor en el periodo voluntario legalmente establecido no ha dado satisfacción al acreedor con aquello a lo que está obligado, se adentra en la ejecución forzosa por parte de los órganos de la administración de justicia. El embargo es el mecanismo imprescindible para afectar al importe de dinero que debe entregar al acreedor o bienes de distinta naturaleza que posteriormente habrá que realizar para el posterior pago al acreedor con el fruto obtenido mediante esa realización.

Mediante la ejecución dineraria se pretende obtener dinero del patrimonio del ejecutado para transferirlo al ejecutante. Para ello, y como criterio general, salvo excepciones, se sujetarán mediante embargo, unos bienes que quedarán bajo la potestad del tribunal para realizarlos y convertirlos en dinero mediante el procedimiento de apremio<sup>35</sup>.

Para proceder al despacho de ejecución, es necesario que previamente se fije el importe concreto que se reclama. Según lo establecido en el art. 575 LEC, “la ejecución se despachará por la cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva en concepto de principal e intereses” ordinarios y moratorios vencidos, incrementada por la que se prevea para hacer frente a los intereses, que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y a las costas de ésta. Sobre los conceptos de costas e intereses futuros, existe el límite<sup>36</sup> que únicamente se podrá solicitar hasta el treinta por ciento, como máximo, de la cantidad que se reclame en la demanda ejecutivo, sin perjuicio de la posterior liquidación<sup>37</sup>.

---

<sup>35</sup> GÓMEZ SÁNCHEZ, Jesús, *La ejecución civil, aspectos teóricos y prácticos del Libro Tercero de La Ley de Enjuiciamiento Civil*, Ed. Dykinson. Madrid, 2002, p. 79.

<sup>36</sup> De forma excepcional, si se justifica por el acreedor que los intereses que se puedan devengar en la ejecución, y las costas del mismo, sean superiores al límite establecido, la cantidad que provisionalmente se fije por dichos conceptos podrá exceder del citado límite.

<sup>37</sup> GÓMEZ SÁNCHEZ, Jesús, *La ejecución civil, aspectos teóricos y prácticos del Libro Tercero de La Ley de Enjuiciamiento Civil* cit., pp. 81-82.

De acuerdo con el art. 581 LEC, será necesario el requerimiento de pago al ejecutante “cuando la ejecución para la entrega de cantidades determinadas de dinero no se funde en resoluciones procesales o arbitrales, despachada la ejecución, se requerirá de pago al ejecutado por la cantidad reclamada en concepto de principal e intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda y si no pagase en el acto, el tribunal procederá al embargo de sus bienes en la medida suficiente para responder de la cantidad por la que haya despacho ejecución y las costas de ésta”. Por otro lado, el art. 580 establece que no será necesario este requerimiento de pago si el “título ejecutivo consiste en resoluciones judiciales o arbitrales o que aprueben transacciones o convenios alcanzados dentro del proceso, que obliguen a entregar cantidades determinadas de dinero, (...) para proceder al embargo de sus bienes”.

El embargo, por tanto, se trata de una declaración de voluntad mediante la cual determinados bienes, que se consideran pertenecientes al patrimonio del ejecutado o del deudor, se afectan o adscriben a la actividad de apremio que ha de realizarse en el mismo procedimiento de ejecución forzosa del que forma parte el propio embargo. Cuando el ejecutado no ha cumplido en el periodo voluntario, encontramos la demanda ejecutiva y el despacho de ejecución, donde ya tenemos determinados el órgano jurisdiccional y las partes, tanto el ejecutado como el ejecutante, de la misma forma, que la actividad esencial que ha de efectuarse para que la pretensión del ejecutante quede satisfecha. Entonces, es necesario para poder alcanzar esa pretensión, necesitamos que el embargo, especifique los bienes sobre los cuales va a recaer esa actividad ejecutiva o de apremio.

## 5.2. Los bienes susceptibles de embargo

El art. 1911 del CC consagra el principio de responsabilidad universal del deudor, estableciendo que “del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros”.

La idea de que el objeto del embargo ha de estar constituido por bienes se halla plasmada con insistente reiteración a lo largo de las disposiciones de la LEC que

regulan esta materia<sup>38</sup>. No obstante, la LEC no determina de forma específica el contenido del concepto de bienes, y, además, el precepto 592 LEC cuando establece el orden de prelación de bienes en el embargo, se hace referencia a otros términos además del de bienes. Siguiendo el sentido literal de los preceptos legales, el concepto bienes comprendería tanto objetos materiales (cosas) como derechos<sup>39</sup>.

Sin embargo, autores como Jorge Carreras Llansana<sup>40</sup> y Manuel Cachón Cadenas<sup>41</sup> establecen que la traba no recae sobre bienes y derechos, sino que únicamente recae sobre derechos, no obstante, por derechos no se atiende a la definición elaborada por el derecho privado o por la teoría general del derecho, sino que para alcanzar una definición de este concepto en derecho procesal es necesario atender a los principios y normas que regulan el proceso, especialmente a la función que desempeña el embargo con relación al apremio. De esta forma, se entiende por derecho “cualquier situación jurídica subjetiva de carácter activo, cualquier posición subjetiva que entrañe un poder jurídico para su titular”. Por lo tanto, el objeto de embargo no es la cosa, sino el derecho de propiedad que recae sobre ella.

Para poder conocer derechos que integran el patrimonio del ejecutado es necesario localizar qué bienes pertenecen al ejecutado. La localización de bienes es definida como “la actividad que se lleva a cabo para determinar la extensión del patrimonio del ejecutado susceptible de embargo, con el fin de que el Ejecutor pueda elegir luego los bienes sobre que ha de recaer la traba o afección, dado que toda actividad selectiva precisa anteriormente de un conocimiento de todos los elementos entre los cuales ha de llevarse a cabo la selección”<sup>42</sup>.

---

<sup>38</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel-Jesús, *El embargo*, cit., pp. 118-119.

<sup>39</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel-Jesús, *El embargo*, cit., p. 121.

<sup>40</sup> CARRERAS LLANSANA, Jorge, *El Embargo de bienes*, cit., pp. 148-152.

<sup>41</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel-Jesús, *El embargo*, cit., pp. 122-136.

<sup>42</sup> CARRERAS LLANSANA, Jorge, *El Embargo de bienes*, cit., p. 200. A su vez, CACHÓN CADENAS, Manuel, *La ejecución procesal civil*, cit., p. 92.



La actual LEC ha establecido dos medidas tendentes a la determinación de los bienes embargables del patrimonio del ejecutado. Por un lado, encontramos que el único que realmente conoce su propio patrimonio es el ejecutado, de esta forma, él mismo puede llevar a cabo esa determinación, o puede ser que, el ejecutante conozca también su patrimonio, de este modo, en la demanda ejecutiva o más tarde, una vez se tenga conocimiento, puede determinar los bienes del patrimonio del deudor a efectos del embargo. En caso de que no exista determinación por parte del ejecutado o del ejecutante o que sobre los designados no quepa embargo, el art. 589 LEC establece la idea de que el Secretario Judicial de oficio deberá requerir al deudor que determine la relación de sus bienes con el apercibimiento de sanciones, tanto de naturaleza penal como civil.

Por otro lado, otra de las medidas tendentes a la determinación de los bienes embargables es la investigación judicial del patrimonio del ejecutado recogida en el art. 590 LEC. Se trata de una investigación judicial sometida a dos requisitos, que el ejecutante no pueda designar bienes del patrimonio de ejecutado suficientes para el fin de la ejecución y que este la solicite de forma fundada. Además, de forma complementaria, el art. 591 LEC establece el deber de prestar colaboración en las actuaciones de la ejecución tanto de personas como de entidades públicas y privadas.

### 5.3. Concreción del objeto del embargo.

Una vez conocido el patrimonio del ejecutado, es necesario determinar qué bienes serán objeto del embargo. Para que un bien pueda ser embargado debe ser alienable y embargable, además, es necesario que cumpla con los requisitos de pertenencia, suficiencia y preferencia.

En primer lugar, es necesario que el bien resulte embargable, es decir, que el bien se pueda enajenar en el proceso de ejecución y que se pueda considerar como bien a efectos del embargo<sup>43</sup>. Por lo tanto, es necesario que no exista una disposición

---

<sup>43</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel-Jesús, *El embargo*, cit., pp. 295-296.

legal que declare la inembargabilidad de los bienes de que se trate. El art. 605 establece una relación de bienes que serán en absoluto inembargables:

- “1º- Los bienes que hayan sido declarados inalienables.
- 2º- Los derechos accesorios, que no sean alienables con independencia del principal.
- 3º- Los bienes que carezcan, por sí solos, de contenido patrimonial.
- 4º- Los bienes expresamente declarados inembargables por alguna disposición legal.”

Seguidamente, el art. 606 LEC establece una relación de bienes del ejecutado que se consideran inembargables, como son:

- “1º- El mobiliario y el menaje de la casa, así como las ropas del ejecutado y de su familia, en lo que no pueda considerarse superfluo. En general, aquellos bienes como alimentos, combustible y otros que, a juicio del tribunal, resulten imprescindibles para que el ejecutado y las personas de él dependientes puedan atender con razonable dignidad a su subsistencia.
- 2º- Los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el ejecutado, cuando su valor no guarde proporción con la cuantía de la deuda reclamada.
- 3º- Los bienes sacros y los dedicados al culto de las religiones legalmente registradas.
- 4º- Las cantidades expresamente declaradas inembargables por Ley.
- 5º- Los bienes y cantidades declarados inembargables por Tratados ratificados por España.”

De forma posterior, el art. 607 LEC establece que “es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional.”

En segundo lugar, cuando el art. 605 LEC establece que son inembargables los bienes inalienables, la doctrina considera que “un bien es alienable cuando puede

ser transmitido eficazmente a un tercero”<sup>44</sup> mientras que la inalienabilidad se trata de “la inidoneidad objetiva de un bien o del derecho que sobre él recae para ser transmitido, es decir, para que cambie su titularidad de sujeto por cualquiera de los medios admitidos por el Derecho, de modo que se transmisión deviene inexistente o nula”<sup>45</sup>. Es decir, es necesario que el bien objeto de embargo, más tarde pueda ser realizable en el procedimiento de apremio. De forma general, cuando se embarga un derecho, se expresa la voluntad de que sobre el mismo se lleve a cabo una actividad que consiste en la transmisión del derecho en cuestión, de esta forma, si el derecho es inalienable, la traba de mismo sería contrario a la función del embargo, ya que ninguna de las vías de apremio principales podría recaer sobre él<sup>46</sup>.

Los bienes inalienables que se encuentran en nuestro ordenamiento jurídico se tratan de los derechos que carecen de idoneidad natural para cambiar de titular, como por ejemplo, los derechos inherentes a la persona, de los derechos ligados de forma inseparable a otros derechos, como los derechos de servidumbre o los derechos accesorios respecto de un crédito, de los derechos inalienables por existir una prohibición legal ya sea de forma general o específica, como por ejemplo los bienes de dominio público, los bienes comunales, los derechos de la Hacienda Pública, los derechos de los arrendatarios de fincas rústicas, entre muchos otros.

Respecto los requisitos de pertenencia, suficiencia y preferencia, es necesario señalar que para que un bien pueda ser objeto de embargo en un proceso concreto es necesario que el bien pertenezca al ejecutado<sup>47</sup>, esto significa que el ejecutado debe ser el titular de un determinado derecho para que este pueda ser embargado, ya que si la traba se practica sobre bienes pertenecientes a una persona distinta del

---

<sup>44</sup> FERNANDEZ-BALLESTEROS, Miguel Ángel, *El proceso de ejecución*, Ed. Romargraf. Barcelona, 1982, p. 122.

<sup>45</sup> CARRERAS LLANSANA, Jorge, *El Embargo de bienes*, cit., p.161.

<sup>46</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel-Jesús, *El embargo*, cit., pp. 146-147. A su vez, CACHÓN CADENAS, Manuel, *La ejecución procesal civil*, cit., pp. 126-127.

<sup>47</sup> Este requisito se desprende a lo largo de la regulación del proceso ejecutivo, sin embargo, el art. 593 LEC lo regula de forma especial.

ejecutado, se desviará la ejecución hacia alguien que no tiene por qué padecer los efectos de esta, al no ser el sujeto contra el que viene formulada la pretensión ejecutiva<sup>48</sup>. También, es necesario que el bien sea suficiente para cubrir la cantidad por la que se ha despachado a ejecución<sup>49</sup>, es decir, el valor de cambio del conjunto de bienes no puede ser inferior a la cantidad por la que se haya decretado la ejecución, no obstante, el ejecutado tampoco debe sufrir un mayor quebranto económico del que sea estrictamente necesario para satisfacer el derecho del ejecutante. De esta forma, los bienes suficientes serán aquellos que resulten indispensables para cubrir la cuantía de la ejecución y que se acerquen lo más posible al valor de esta suma<sup>50</sup>. Por último, el requisito de preferencia se conecta con el art. 592 LEC, el cual establece el orden en los embargos, estableciendo de forma prioritaria el orden que hayan suscrito las partes mediante convenio, o en defecto de este, el apartado 2º del mismo artículo establece un orden por el cuál se debe proceder a embargar.

El art. 592 LEC establece tres criterios en orden de subsidiariedad. El primero atiende a la voluntad entre acreedor y deudor, el segundo, tiene en cuenta los principios de mayor facilidad de enajenación y menor onerosidad para ejecutado y, por último, impone un orden de embargos.

Además, el art. 592 LEC atiende de forma prioritaria al convenio que hayan podido suscribir las partes a la hora de determinar el orden del embargo, ya sea suscrito una vez iniciada la ejecución o previamente a ella. Tal y como establece Luís Casero Linares, el proceso civil se basa en el principio dispositivo, de esta forma, el acuerdo entre las partes para el embargo de determinados bienes con los que hacer frente a la deuda es determinante en la ejecución, debiendo el Letrado de la Administración

---

<sup>48</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel-Jesús, *El embargo*. cit., p. 220. CACHÓN CADENAS, Manuel, *La ejecución procesal civil*, cit., p. 148.

<sup>49</sup> Este requisito se desprende del art. 584 LEC.

<sup>50</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, *El embargo*, cit., pp. 236-237.

de Justicia proceder al embargo determinado por las partes, salvo, lógicamente, que tal acuerdo sea contrario a la Ley o perjudique derechos de terceros<sup>51</sup>.

En defecto de pacto entre las partes, según lo que establece el art. 592 LEC, el propio Letrado de la Administración de Justicia acordará el embargo de determinados bienes atendiendo a los principios de mayor facilidad de enajenación y la menor onerosidad para el ejecutado.

Cuando los criterios anteriores resultasen imposibles o de muy difícil aplicación, se establece un orden para realizar los embargos, que responden a los mismos criterios anteriores. El establecimiento de esta lista no implica que el Letrado de la Administración de Justicia tenga que tener un conocimiento del total del patrimonio del ejecutado, sino simplemente que ante la posibilidad que exista una pluralidad de bienes para embargar, cuyo valor superaría el de la cantidad por la que se ha despacho ejecución, se debe seguir el orden legamente establecido<sup>52</sup>. El orden que se establece es el siguiente:

- 1.º Dinero o cuentas corrientes de cualquier clase.
- 2.º Créditos y derechos realizables en el acto o a corto plazo, y títulos, valores u otros instrumentos financieros admitidos a negociación en un mercado secundario oficial de valores.
- 3.º Joyas y objetos de arte.
- 4.º Rentas en dinero, cualquiera que sea su origen y la razón de su devengo.
- 5.º Intereses, rentas y frutos de toda especie.
- 6.º Bienes muebles o semovientes, acciones, títulos o valores no admitidos a cotización oficial y participaciones sociales.
- 7.º Bienes inmuebles.
- 8.º Sueldos, salarios, pensiones e ingresos procedentes de actividades profesionales y mercantiles autónomas.
- 9.º Créditos, derechos y valores realizables a medio y largo plazo.

---

<sup>51</sup> CASERO LINARES, Luís, *El embargo en la ley de enjuiciamiento civil*, Ed. Bosch, colección práctica jurídica, 2ª edición, Barcelona, 2012, p. 96.

<sup>52</sup> CASERO LINARES, Luís, *El embargo en la ley de enjuiciamiento civil*, cit., p. 97.

## 6. El embargo de sueldos, salarios y pensiones

Acabado de ser expuesto en el apartado anterior una introducción para comprender el punto en el que estamos de la ejecución forzosa, entramos en el objeto del presente estudio, el embargo de sueldos y pensiones. El art. 607 LEC va a ser la normativa general en la cuál me voy a basar junto con la orientación adoptada por el Tribunal Constitucional, siendo su objetivo llegar a un régimen de embargabilidad e inembargabilidad único y uniforme<sup>53</sup>.

### 6.1. La protección de las retribuciones

Como anteriormente se ha expuesto en apartados anteriores, el salario cumple una función económico-social de sustentación del trabajador, siendo el medio de subsistencia mayoritario en la población actual. Así, el legislador ha introducido determinados dispositivos de protección a esa remuneración tendentes a garantizar su íntegra percepción por parte del trabajador, en situaciones de normalidad o a establecer mecanismos de salvaguardia o de sustitución cuando, desaparecida esa normalidad, peligra o se frustra la efectividad de esa prestación. No obstante, es necesario señalar que una parte de la población su medio de subsistencia puede no ser el trabajo, sino una pensión, de esta forma, adquiere, también, una protección jurídica similar a la del salario. Uno de los mecanismos de protección que brinda nuestro ordenamiento jurídico a estas figuras se trata de la condición de inembargabilidad recogida en el art. 607 LEC y el art. 27.2 TRLET.

El origen de la inembargabilidad salarial se suele conectar con el denominado *beneficium competentiae* del Derecho Romano. No se trata de una figura unitaria, sino formada por varias manifestaciones, siendo una de las más antiguas y características la *actio pro socio*, que se trataba de una acción a través de la cual un socio intentaba hacer efectivas las obligaciones de otro socio<sup>54</sup>. El juez compelido

---

<sup>53</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, “Comentario al art. 607 LEC” en AAVV, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, de Lorca Navarriete, Antonio María (dir.), Ed. Lex Nova, tomo III, Valladolid, 2000, p. 3046.

<sup>54</sup> RÍOS SALMERON, Bartolomé, “La inembargabilidad del salario”, discurso leído el día 4 de diciembre de 1986 en el acto de recepción como Académico de Número por el Excmo. Sr. D. Bartolomé Ríos Salmerón y contestación del Excmo. Sr. D. Alfredo Montoya Melgar, *Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Murcia*, Murcia, 1986, p. 14.

mediante una sentencia su pronunciamiento se podía limitar a condenar al demandado, con la imposición del *quod facere potest*, es decir, hasta donde permitía su patrimonio real y efectivo, escapando de este modo de una ejecución personal y a la subsiguiente *infamia*<sup>55</sup>, que se trataba de una degradación del honor civil. Con el tiempo, esta limitación se unió a otra, que es la que realmente es el origen de nuestra institución actual: no solamente se podía condenar al deudor bajo el *quod facere potest*, sino que se agregaba la cláusula de que la condena no le impedía retener un *modicum ne egeat*, es decir, un mínimo encaminado a que el cumplimiento de la obligación no le dejara reducido a la más cruda miseria<sup>56</sup>. Si bien es cierto que en esa vieja institución es donde hay que encontrar las raíces de la inembargabilidad de determinados bienes, en ciertos supuestos, para no quedar reducido a una extrema indigencia, las rentas derivadas del trabajo no encontraban ningún tipo de protección.

El beneficio tuvo algunas manifestaciones en el derecho medieval, encontrado referencias, por ejemplo en el Código de las Siete Partidas, concretamente en la partida 5ª, en la ley 15, en el Título 10 que establecía lo siguiente: “si un compañero debiese a otro por razón de la compañía, tanto que pagándolo se quedara sin lo necesario para vivir, siempre que por otra parte no tenga tampoco medios para adquirirlo, no se le podrá obligar a que pague toda la deuda y sí solo lo que pueda, quedándole lo preciso para que viva”. Sin embargo, la extensión del beneficio en relación con las rentas de trabajo fue obra de la labor de los jueces durante el siglo XIX<sup>57</sup>.

Más tarde, con la codificación, el beneficio no fue recogido por el CC, sin embargo, encontró en el derecho moderno su reflejo en las previsiones que reservan o limitan

---

<sup>55</sup> RÍOS SALMERON, Bartolomé, “La inembargabilidad del salario”, cit., p.14.

<sup>56</sup> RÍOS SALMERON, Bartolomé, “La inembargabilidad del salario”, cit., p. 15.

<sup>57</sup> PEDRAJAS MORENO, Abdón, *El embargo sobre retribuciones (su práctica y sus límites)*, cit., p. 48.

el embargo de determinados bienes, contenidas en la LEC, desde su primera redacción en 1881, hasta la actual LEC del 2000<sup>58</sup>.

En el ámbito internacional de las relaciones laborales, la primera y más importante manifestación de la protección del salario del trabajador se encuentra en el art. 10 del Convenio 95 de la OIT<sup>59</sup> relativo a la protección del salario de 1949, cuyo reflejo en la normativa interna aparece en el art. 27.2 TRLET<sup>60</sup>.

Respecto al fundamento de estas protecciones, en primer lugar, las primeras referencias se justifican en la compasión ante la indigencia del trabajador y está conectado con las primeras leyes obreras. Más tarde, con el establecimiento del Estado Social y la CE de 1978, la verdadera fundamentación de esta protección se encuentra en la salvaguardia de la dignidad de la persona recogida en el art. 10.1 CE. De la misma forma, Jorge Carreras Llansana conecta la inembargabilidad salarial con razones de interés social, toda vez que “el Estado, si bien debe asegurar al acreedor perjudicado por el incumplimiento de su derecho la necesaria protección, no puede, por razones sociales fácilmente comprensibles, privar al responsable incluso de los bienes más especiales que necesita para subsistir”<sup>61</sup>.

En cuanto a la jurisprudencia del TC en materia de protección del salario mediante la inembargabilidad, ha tenido en cuenta la salvaguardia de otros derechos constitucionales como son el derecho a la tutela judicial efectiva recogido en el art. 24.1 CE y la igualdad ante la ley recogido en el art. 14 CE. De esta forma, el TC

---

<sup>58</sup> PEDRAJAS MORENO, Abdón, *El embargo sobre retribuciones (su práctica y sus límites)*, cit., p. 48.

<sup>59</sup> Convenio adoptado en las 32ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo con fecha de 1 de julio de 1949. Se trata de un Convenio Técnico de la OIT, con 98 ratificaciones y con su entrada en vigor el 24 de septiembre de 1952. Fue ratificado por España el 24 de junio de 1958, excluyendo de su aplicación el art. 11 en virtud de la ratificación del Convenio núm. 173, aceptando la Parte II.

<sup>60</sup> PEDRAJAS MORENO, Abdón, *El embargo sobre retribuciones (su práctica y sus límites)*, cit., p. 48-49.

<sup>61</sup> CARRERAS LLANSANA, Jorge, *El Embargo de bienes*, cit., p. 185-187.



trata esta cuestión buscando un equilibrio entre estos valores constitucionales que entran en colisión con esta protección.

En la STC 113/1989, de 22 de junio de 1989, se realiza un examen respecto si la inembargabilidad de bienes y derechos constituye una limitación constitucionalmente justificada del derecho del acreedor a que se ejecute la sentencia firme que le reconoce su derecho de crédito<sup>62</sup>. La jurisprudencia que se desprende de la misma es que, en principio, cuando una resolución judicial firme reconoce al acreedor un derecho de crédito, éste tiene el derecho de hacerlo efectivo en toda su cuantía, siempre que el condenado tenga medios económicos con los que responder a su obligación. Sin embargo, la ley por razones de interés público y social excluye determinados bienes y derechos de la ejecución forzosa, declarándolos inembargables y prohibiendo, en su consecuencia, que el ejecutante proyecte su acción sobre los mismos, que podrían ser objeto de la actividad ejecutiva de no mediar prohibición. Dentro de las razones que motivan las declaraciones legales de inembargabilidad, encontramos la razón social de impedir que la ejecución forzosa destruya por completo la vida económica del ejecutado y se ponga en peligro su subsistencia personal y la de su familia, por ello, la ley establece normas de inembargabilidad de salarios y pensiones que son, en muchas ocasiones, es la única fuente de ingresos económicos de gran número de ciudadanos.

Entre los valores constitucionales que conceden legitimidad al límite que la inembargabilidad impone al derecho del acreedor a que se cumpla la sentencia firme que le reconoce el derecho de crédito, se encuentra el respecto a la dignidad humana, recogido como uno de los fundamentos del orden político y de la paz social del art. 10.1 CE, siendo contrario a éste, que la efectividad de los derechos patrimoniales se lleve al extremo de sacrificar el mínimo vital del deudor, privándole de los medios indispensables para la realización de sus fines personales, así como la protección de la familia, el mantenimiento de la salud y el uso de una vivienda digna y adecuada.

---

<sup>62</sup> STC 113/1989, de 22 de junio, fundamento jurídico 3º, [ECLI:ES:TC:1989:113].

Sin embargo, para salvaguardar ambos derechos constitucionales es necesario que sea proporcional, es decir, que la declaración legal de inembargabilidad se desenvuelva dentro de los límites cuantitativos que resulten imprescindibles para asegurar el mínimo económico vital de sus beneficiarios y no los sobrepasen de manera tal que se extienda su inmunidad frente a la acción ejecutiva de los acreedores. Esa determinación de cuál es el nivel económico de subsistencia de las personas corresponde determinarlo al legislador.

Además, en esta misma sentencia, atendiendo al principio de proporcionalidad que ha de tener en cuenta por parte de legislador a la hora de establecer la inembargabilidad de los salarios y pensiones, como también, las exigencias del principio de igualdad y el derecho a la tutela judicial efectiva declaró inconstitucional el art. 22.1 de la Ley General de la Seguridad Social de 30 de mayo de 1974 al establecer una inembargabilidad total de las pensiones, siendo contrario entonces a ese principio de proporcionalidad que ha de tener en cuenta el legislador a la hora de determinar los límites cuantitativos que resulten imprescindibles para asegurar el mínimo económico vital de sus beneficiarios.

#### 6.2. Alcance de la inembargabilidad

De acuerdo con el criterio que se ha seguido tradicionalmente en nuestro sistema procesal, el art. 607 LEC establece la embargabilidad parcial de los sueldos y pensiones, lo que significa, por tanto, que estos elementos patrimoniales son parcialmente inembargables<sup>63</sup>. Tradicionalmente, en nuestro ordenamiento jurídico han coexistido diversos regímenes en relación con la embargabilidad de los sueldos percibidos por los distintos tipos de trabajadores por cuenta ajena, no obstante, desde una forma muy temprana, en sus primeras sentencias sobre el tema<sup>64</sup>, el TC ha seguido una tendencia encaminada a llegar a un régimen de embargabilidad e inembargabilidad de sueldos y pensiones lo más uniforme posible<sup>65</sup>.

---

<sup>63</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, *La ejecución procesal civil*, cit., p. 141.

<sup>64</sup> En ese sentido cabe citar, entre otras, STC 54/1983, STC 150/1985, STC 169/1985, STC 170/1985 y STC 171/1985.

<sup>65</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, *La ejecución procesal civil*, cit., p. 141.

Así, en nuestro ordenamiento jurídico los salarios y pensiones no han sido establecidos por el legislador como un bien absolutamente inembargable dentro del art. 605 LEC, sino que más bien han sido dotados de una inembargabilidad limitada a la cuantía del SMI. Exactamente, el art. 607.1 y el art. 27 TRLET, establecen que es inembargable el sueldo o pensión que no exceda de la cuantía expresamente señalada para el salario mínimo interprofesional. De esta forma, esta parte es inejecutable, otorgándole la ley una garantía de inembargabilidad absoluta y una protección mediante el art. 609 LEC declarando la nulidad de pleno derecho del embargo efectuado sobre bienes inembargables.

A partir de esa prohibición de embargo, las retribuciones que sean superiores al SMI, el art. 607.2 LEC establece una escala progresiva de embargabilidad parcial respecto de la porción del sueldo y pensión que exceda de la cuantía indicada, tomando como parámetro la cuantía del SMI<sup>66</sup>.

La escala que instaura el art. 607.2 LEC es la siguiente:

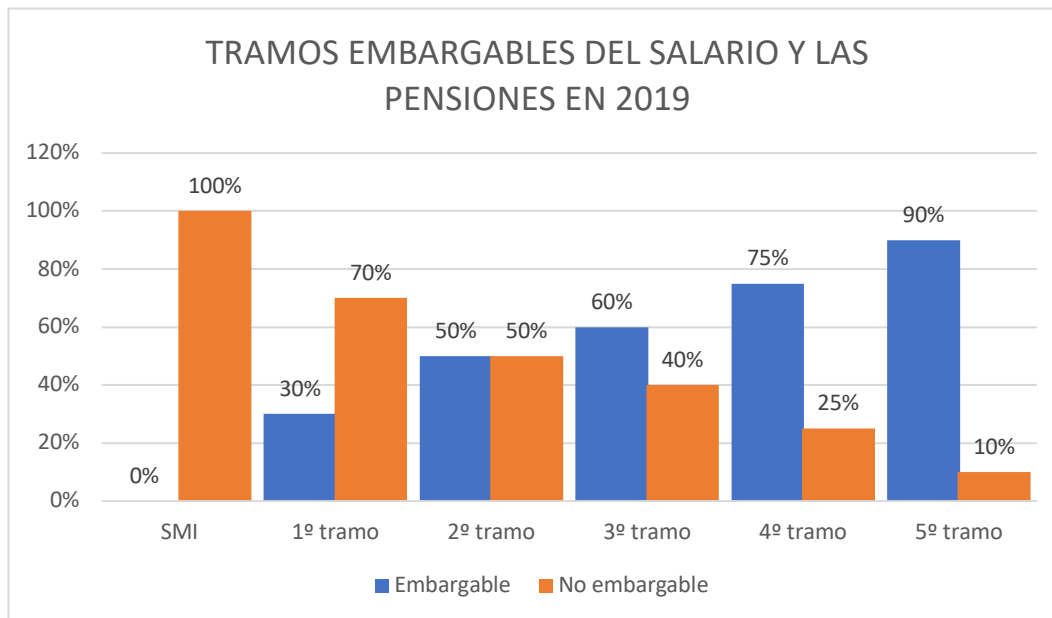
- a) Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del SMI, el 30%
- b) Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer SMI, el 50%.
- c) Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto SMI, el 60%.
- d) Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto SMI, el 75%.
- e) Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90%.

Como se ha expuesto en apartados anteriores, el SMI de 2019, tal y como ha establecido el RD 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el SMI para 2019, se encuentra fijado en 30 euros/día o 900/mes, según la forma en la que esté fijado el salario, ya sea por días o por meses. De esta forma, en 2019 será, en

---

<sup>66</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, “Comentario al art. 607 LEC”, en AAVV, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 3046-3047.

principio, absolutamente inembargable estos 30 euros/día o 900 euros/mes, resultando los tramos embargables:



Fuente: art. 607.2 LEC. Elaboración propia

De esta forma, para interpretar los resultados del gráfico es necesario clarificarlo con números. Si el trabajador o el pensionista recibe 900 euros/mes, esta cantidad resultará inembargable debido a que es igual al SMI de 2019. Sin embargo, si el trabajador o el pensionista recibe una cuantía superior, entonces entra en juego la escala progresiva del art. 607.2 LEC.

El primer tramo se extiende desde la cuantía adicional de 900 euros/mes hasta el importe equivalente al doble del SMI, es decir 1.800 euros/mes. En este tramo es posible el embargo del 30%. Así, si el trabajador o pensionista percibiera 1.800 euros/mes, a esta cantidad sería necesario restarle los 900 euros que corresponderían al SMI y, por lo tanto, son inembargables. El resultado sería 900 euros, de los cuales, sería necesario calcular el 30% del primer tramo de embargo, obteniendo 270 euros como cuantía embargable.

El segundo tramo consta desde la cuantía adicional de más del doble del SMI, 1.800 euros/mes, hasta el importe equivalente a un tercer SMI, 2.700 euros/mes. En este

tramo es posible el embargo del 50%. Si el trabajador o pensionista cobrase 2.700 euros/mes, a esta cantidad es necesario restarle 1.800 euros que se trata del doble del SMI, resultando 900 euros. A estos 900 euros es necesario calcular el 50% obteniendo 450 euros, y como se trata del segundo tramo de embargo, es necesario sumar los 270 euros anterior que se deben al primer tramo del embargo más los 450 euros del segundo tramo, resultando un total de 720 euros como cuantía embargable.

El tercer tramo se compone desde la cuantía adicional que supere los 2.700 euros/mes hasta la cuantía equivalente a un cuarto SMI, 3.600 euros/mes. En este tramo es posible el embargo del 60%. De esta manera, si el trabajador o pensionista percibiera 3.600 euros/mes, a esta cantidad es necesario restarle 2.700 euros, cuantía equivalente al triple del SMI, resultando 900 euros. A estos 900 euros hay que calcular el 60% del mismo, obteniendo 540 euros al encontrarnos en el tercer tramo de embargo. Así, a estos 540 euros es necesario sumar la cuantía embargable del primer tramo, que serían 270 euros y la del segundo tramo, que asciende a 450 euros, obteniendo 1.260 euros de cuantía embargable.

El cuarto tramo se extiende desde la cuantía adicional de 3.600 euros/mes hasta el importe equivalente a un quinto SMI, unos 4.500 euros/mes. En este tramo, el embargo posible asciende hasta el 75%. Si un trabajador o un pensionista percibiese 4.500 euros/mes, a los que hay que restarle 3.600 euros, en concepto del cuádruple SMI, resultando 900 euros. De estos 900 euros, es necesario calcular el 75% al encontrarnos en el cuarto tramo, obteniendo 675 euros. A estos 675 euros, es necesario sumar el primer tramo, 270 euros embargables, los 450 euros del segundo tramo y los 540 del tercer tramo, resultando como cuantía embargable 1.935 euros.

Por último, el quinto tramo se compone por cualquier cantidad que exceda de los 4.500 euros/mes, y en este tramo, la cuantía embargable es el 90%. Por lo tanto, en caso de que el trabajador o pensionista cobre una cantidad, por ejemplo, de seis veces el SMI, 5.400 euros/mes, es necesario restarle los 4.500 euros, en concepto quintuple SMI, obteniendo 900 euros. De estos 900 euros, es necesario calcular el

90%, ya que se trata del quinto tramo, obteniendo 810 euros embargables. A estos 810 euros, es necesario sumar el primer tramo, 270 euros embargables, los 450 euros del segundo tramo embargables, los 540 euros del tercer tramo y los 675 euros del cuarto tramo, obteniendo una cifra de 2.745 euros embargables.

## **7. Problemas del embargo de sueldos, salarios y pensiones**

### **7.1. Determinación de los ingresos incluidos y excluidos del ámbito del embargo**

El art. 607 LEC, de forma reiterada, establece la inembargabilidad del salario, sueldo, pensión o su equivalente, no obstante, no especifica de forma clara y precisa si pueden subsumirse en su ámbito de aplicación otro tipo de percepciones.

Para empezar, para que resulte aplicable el artículo 607 LEC, es necesario que se trate de ingresos pecuniarios. Esta idea se desprende del parámetro que utiliza el precepto citado al fijar la porción embargable. Además, hay que tener en cuenta que, a la hora de regular el aseguramiento del embargo de sueldos y pensiones, el art. 621 LEC, prevé como medida a adoptar, la retención de los mismos y su ingreso en la Cuenta de Depósitos y consignaciones del Juzgado, lo que viene a corroborar la idea de que esos ingresos deben tener naturaleza pecuniaria<sup>67</sup>. No obstante, esto no quiere decir que todos los derechos de naturaleza no pecuniaria que deriven de la prestación de servicios laborales sean embargables, ya que algunos de esos derechos resultaran ser inembargables por resultar inseparables de la posición jurídica en la que se encuentra el trabajador por su condición de tal<sup>68</sup>.

Sin embargo, se deberán incluir en el concepto de retribución del ejecutado la remuneración en especie que percibe el trabajador, dado que el art. 26.1 TRLET considera como salario la totalidad de las prestaciones económicas de los trabajadores, ya sea en dinero o en especie por la prestación profesional de los

---

<sup>67</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, “Comentario al art. 607 LEC”, en AAVV, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 3047.

<sup>68</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, “Comentario al art. 607 LEC”, en AAVV, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 3047.

servicios laborales por cuenta ajena<sup>69</sup>, de esta forma, será posible la aplicación de la inembargabilidad parcial que establece el art. 607 LEC a la suma pecuniaria que, en su caso, el ejecutado obtenga por la venta de aquellos bienes<sup>70</sup>.

Respecto a los ingresos derivados del trabajo por cuenta ajena, es necesario que la causa directa de las percepciones pecuniarias de que se trate sea la prestación de servicios laborales. Sin embargo, la inembargabilidad parcial del art. 607 LEC no es aplicable a los ingresos obtenidos por la prestación de servicios laborales de carácter ilícito<sup>71</sup>.

En cuanto a las pensiones, sin duda, es necesario señalar que se incluye en el ámbito de aplicación del art. 607 las prestaciones de la Seguridad Social, de la misma forma, que la pensión de desempleo<sup>72</sup> y las pensiones de Mutualidades laborales, Montepíos o instituciones análogas<sup>73</sup>. De forma relacionada, respecto los Planes y Fondos de Pensiones, el art. 8.8 del RDL 1/2002, de 29 de noviembre, establece que “los derechos consolidados del partícipe de un plan de pensiones no podrán ser objeto de embargo, traba judicial o administrativa, hasta el momento en que se cause el derecho a la prestación o en que sean disponibles en los supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga duración o por corresponder a aportaciones realizadas con al menos diez años de antigüedad”.

De este modo, se establece una prohibición de embargo de los derechos consolidados del partícipe, con el objetivo de evitar que el embargo y la ejecución

---

<sup>69</sup> ACHÓN BRUÑÉN, M.<sup>a</sup> José, “La problemática del embargo de sueldos y pensiones”, *La Ley Digital*, de 15 de febrero de 2019, p. 6.

<sup>70</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, “Comentario al art. 607 LEC”, en AAVV, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 3047.

<sup>71</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, “Comentario al art. 607 LEC”, en AAVV, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 3047.

<sup>72</sup> AAP de Barcelona, Sección 12<sup>a</sup>, n.º. 229/2005, de 9 de diciembre de 2005, rec. 691/2005 [ECLI:ES:APB:2005:5818A].

<sup>73</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, “Comentario al art. 607 LEC”, en AAVV, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 3048.

provoquen la realización inmediata de los derechos que el ejecutado ya ha consolidado en relación con el Plan de Pensiones. Así pues, mientras no haya llegado la fecha de hacer efectivas las prestaciones derivadas del Plan, lo único que podrá ser embargado son las cantidades que, en su caso, el ejecutado pueda percibir en un futuro, esto es, a partir de la fecha en que se produzca el evento mencionado<sup>74</sup>. No obstante, para asegurar la efectividad de ese embargo, el ejecutante puede pedir al juez que requiera a las entidades depositaria y gestora del Fondo de Pensiones en que se haya integrado el Plan del que sea partícipe el ejecutado, a fin de que, llegada la fecha en que deban hacerse efectivas las prestaciones a que tenga derecho el ejecutado retenga esas cantidades a disposición del Juzgado<sup>75</sup>.

Por el contrario, si el ejecutado ya viene percibiendo prestaciones derivadas del Plan de Pensiones, la prohibición de embargo el art. 8.8 del RDL 1/2002, de 29 de noviembre, no es aplicable. En este caso, nos encontramos ante un embargo ordinario de un crédito que el ejecutado tiene ante un tercero, de manera que el embargo de ese crédito puede dar lugar a la inmediata retención judicial de las cantidades que le corresponda percibir al ejecutado<sup>76</sup>, ya sea por ser el propio partícipe del Plan de pensiones o se trate de un beneficiario del mismo. Sin embargo, si esta prestación se percibe mediante prestaciones periódicas, en forma de capital o en prestaciones mixtas, resulta aplicable la inembargabilidad parcial del art. 607 LEC. Para calcular la cuantía embargable de las prestaciones periódicas, es necesario acumular estas cantidades con las restantes pensiones o retribuciones que el ejecutado pueda percibir, siempre que se encuentren incluidas en las percepciones económicas mencionadas por el art. 607 como son el sueldo, las pensiones de la Seguridad Social<sup>77</sup> y todas aquellas retribuciones de la misma

---

<sup>74</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, “Comentario al art. 607 LEC”, en AAVV, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 3042.

<sup>75</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, “Comentario al art. 607 LEC”, en AAVV, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 3042.

<sup>76</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, “Comentario al art. 607 LEC”, en AAVV, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 3042.

<sup>77</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, “Comentario al art. 607 LEC”, en AAVV, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 3043.



naturaleza que han sido incluidas por la doctrina y la jurisprudencia a la protección de la inembargabilidad parcial. Además, en cuanto a la prestación del Plan de Pensiones en forma de capital, será necesario imputar la cantidad que corresponda percibir al ejecutado a todo el periodo de tiempo durante el que el partícipe ha ido efectuando aportaciones al Plan de Pensiones<sup>78</sup>.

Respecto el art. 607.6 LEC es necesario hacer referencia a lo que establece en cuanto a los ingresos procedentes de actividades profesionales y mercantiles autónomas. La inembargabilidad parcial reconocida en el art. 607 LEC extiende sus efectos a los ingresos que el ejecutado perciba por una actividad laboral por cuenta propia, tanto si esa actividad se desarrolla en un establecimiento o negocio mercantil perteneciente al ejecutado, como si consiste en la prestación de servicios profesionales de otra naturaleza. No obstante, esta inembargabilidad parcial no alcanza a los ingresos que el ejecutado obtenga por el solo hecho de ser titular de una empresa o establecimiento mercantil, ya que la característica que fundamenta la inclusión de esos ingresos en la inembargabilidad parcial es que los ingresos deben percibirse en concepto de remuneración por el trabajo realizado por el ejecutado<sup>79</sup>, incluidas las comisiones<sup>80</sup> y no por la mera propiedad. Siguiendo con la misma argumentación, también es posible entender como ingresos incluibles a la protección de la inembargabilidad parcial del art. 607 LEC a las percepciones de los administradores de entidades mercantiles y las de los socios de cooperativas de trabajo asociado por los servicios prestados a la cooperativa, debido a que se tratan de retribuciones que derivan del trabajo personal, con independencia de que provengan de un contrato de trabajo<sup>81</sup>.

---

<sup>78</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, “Comentario al art. 607 LEC”, en AAVV, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 3043.

<sup>79</sup> AAP de Zamora, Sección 1ª, nº. 19/2007, de 8 de marzo de 2007, rec. 22/2007 [ECLI:ES:APZA:2007:18A] y AAP de Castellón, Sección 1ª, nº. 216/2007, 30 de octubre de 2007, rec. 161/2007 [ECLI:ES:APCS:2007:533A].

<sup>80</sup> SAN, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7.ª, de 11 de octubre de 2004, rec. 1517/2002 [ECLI:ES:AN:2004:6254].

<sup>81</sup> ACHÓN BRUÑÉN, M.ª José, “La problemática del embargo de sueldos y pensiones”, *La Ley Digital*, de 15 de febrero de 2019, p. 6.

En referencia a los ingresos que no merecen la consideración de sueldo o pensión, y que, por lo tanto, no se encuentran protegidos por la inembargabilidad parcial del art. 607 LEC, es necesario señalar, en primer lugar, las rentas vitalicias recogidas en el art. 1802 CC las cuales se encuentran en el apartado 4º y 5º en el orden de preferencia del embargo del art. 592.2 LEC y pueden ser embargadas en su totalidad sin ningún tipo de limitación<sup>82</sup>.

Tampoco resulta aplicable el art. 607 a las cantidades que el ejecutado pueda percibir en concepto de indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones, despidos o, en general, por la extinción del contrato de trabajo. Estas cantidades no pueden incluirse en la protección por la inembargabilidad parcial que establece el art. 607 debido a que el art. 26 TRLET no contempla las indemnizaciones por despido dentro del concepto de salario, de este modo, se han de entender embargables por completo, dado que los supuestos de inembargabilidad son de carácter restrictivo<sup>83</sup>. De la misma forma, también se podrán embargar totalmente las indemnizaciones que el ejecutado tenga derecho a percibir por la lesión de sus derechos laborales y por daños a su persona o en sus bienes, como las de accidente laboral o las dietas de desplazamiento, que corren la misma suerte que las indemnizaciones por daños irrogados a los derechos fundamentales, como el derecho a la integridad física en caso de lesiones, el derecho al honor, a la propia imagen, etc.<sup>84</sup>.

7.2. La naturaleza de los ingresos existentes en la cuanta bancaria en que el ejecutado ha domiciliado su nómina o percibe su pensión

En la sociedad actual resulta habitual que los sueldos y pensiones se perciban a través del ingreso de las mismas en una cuenta bancaria abierta a nombre del

---

<sup>82</sup> AAP de A Coruña, Sección 5ª, nº. 53/2007, de 2 de mayo de 2007, rec. 570/2006 [ECLI:ES:APC:2007:87A].

<sup>83</sup> ACHÓN BRUÑÉN, M.<sup>a</sup> José, “La problemática del embargo de sueldos y pensiones”, *La Ley Digital*, de 15 de febrero de 2019, p. 7.

<sup>84</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, “Comentario al art. 607 LEC”, en AAVV, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 3.048.

perceptor. De esta forma, puede ocurrir que, en el momento del embargo, el ejecutado aún no hubiera retirado de esa cuenta el importe del sueldo o pensión, o que solamente se haya extraído una parte del mismo. Se plantea, entonces, el problema de determinar si el importe de sueldo ingresado en la cuenta debe calificarse, a efectos del embargo, como sueldo o, por el contrario, como otro saldo cualquiera que el ejecutado tiene contra la entidad bancaria<sup>85</sup>. Si se opta por la primera solución, esa cantidad sólo será embargable parcialmente con arreglo a la escala del art. 607 LEC, mientras que, si se prefiere la segunda opción, la suma en cuestión será embargable en su totalidad, como un saldo bancario normal<sup>86</sup>.

La LEC actual como la pretérita LEC no regulan esta cuestión, mientras que la LGT sí regula este aspecto en relación con la ejecución tributaria. Así, el art. 171.3 LGT, establece que cuando en la cuenta afectada por el embargo se efectúe el cobro de sueldos o pensiones, deberán respetarse las limitaciones a que se refiere la LEC respecto del importe de dicha cuenta correspondiente al sueldo o pensión de que se trate. A estos efectos, se considerará sueldo o pensión el importe ingresado en dicha cuenta por ese concepto en el mes en que se practique el embargo o, en su defecto, en el mes anterior. Sin embargo, es dudoso que lo dispuesto en el art. 171.3 LGT se pueda aplicar analógicamente en la ejecución procesal civil, ya que se trata de una norma que prevé excepciones frente a la regla general que establece la embargabilidad de todos los bienes, de esta forma, debe ser interpretada de forma restrictiva<sup>87</sup>.

Además, con respecto a esta materia, en la ejecución laboral encontramos la regulación que incorpora el art. 254.2 LRJS, de 10 de octubre de 2011, que prevé

---

<sup>85</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, *La ejecución procesal civil*, cit., p. 146. A su vez, CACHÓN CADENAS, Manuel, “Comentario al art. 607 LEC”, en AAVV, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 3.057.

<sup>86</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, *La ejecución procesal civil*, cit., p. 146. A su vez, CACHÓN CADENAS, Manuel, “Comentario al art. 607 LEC”, en AAVV, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 3.057.

<sup>87</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, *La ejecución procesal civil*, cit., p. 146.

una solución distinta a la establecida en el art. 171.3 LGT. El art. 254.2 LRJS establece que los saldos y depósitos bancarios favorables al ejecutado son susceptibles de embargo con independencia de la naturaleza de los ingresos o rentas que hubieran podido contribuir a su generación, pero, a estos efectos, las limitaciones absolutas o relativas de inembargabilidad que puedan afectar a ingresos o rentas de carácter periódico conforme el art. 607 LEC se aplicarán a partir del embargo en el momento de la generación o devengo de cada una de las mensualidades o vencimientos de tales rentas<sup>88</sup>.

De esta forma, atendiendo a las reglas generales concernientes a la ejecución procesal civil, y, por lo tanto, sin necesidad de acudir a la aplicación analógica del art. 254.4 LRJS, en la ejecución procesal civil resulta aplicable una solución similar a la prevista en esa norma. En efecto, a partir del momento en que resulta posible el embargo del sueldo o pensión del ejecutado, la inembargabilidad prevista en el art. 607 LEC es aplicable a las cantidades que deba percibir el ejecutado en concepto de sueldo o pensión desde aquella fecha en adelante, tanto en el caso de que el embargo recaiga directamente sobre el sueldo o pensión, como en el supuesto de que el embargo se practique sobre el saldo de la cuenta bancaria en la que ha sido ingresado ese sueldo o pensión. Por ello, de acuerdo con lo establecido en el art. 592.1 LEC, la cantidad en cuestión que debe ser embargada parcialmente como sueldo o pensión, en vez de ser embargada totalmente como si fuera un saldo bancario ordinario<sup>89</sup>, introduciendo, por eso, una solución menos onerosa para el ejecutado.

## **8. Determinación de la cuantía embargable**

A efectos de calcular la cuantía líquida procedente a embargar del sueldo o pensión de que se trata, tal y como señala el art. 607.5 LEC, sólo se ha de computar la retribución neta que corresponda a percibir al ejecutado. En consecuencia, para el cálculo de la base a la que se ha de aplicar la escala legal prevista en el art. 607.2

---

<sup>88</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, *La ejecución procesal civil*, cit., p. 146-147.

<sup>89</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, *La ejecución procesal civil*, cit., p. 147.

LEC, se han de deducir de la retribución bruta las cantidades que se le retengan al ejecutado para el pago de cuotas de la Seguridad Social, Montepíos, Mutualidades o equivalentes, además, se han de detraer las retenciones correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras cargas fiscales<sup>90</sup>.

Por el contrario, no se pueden deducir de la retribución del ejecutado las cantidades que éste tenga que abonar en concepto de devolución de anticipos concedidos por la entidad o empresa para la que trabaja. Esto encuentra su justificación en que el art. 607.5 LEC manda detraer exclusivamente aquellas cantidades que correspondan a retenciones de carácter público<sup>91</sup>. Por otra parte, este hecho también encuentra su fundamentación en el principio de la *par conditio creditorum*, ya que se intenta impedir que, por vía indirecta, se conviertan en preferentes créditos las devoluciones de los anticipos concedidos por la entidad o empresa para la que trabaja, que, según el derecho material, carecen de este carácter<sup>92</sup>. Además, que se intenta evitar posibles confabulaciones fraudulentas entre el ejecutado y el tercero deudor en perjuicio del ejecutante. Así, para que este tercer deudor pueda ver efectiva su deuda, deberá acudir a los mecanismos procesales oportunos para hacer efectivo su crédito, e incluso, si procede, puede interponer una tercería de mejor derecho<sup>93</sup>.

También, para la determinación de la cuantía líquida a embargar, es necesario atender a todas las posibles retribuciones que puede recibir el ejecutado. De esta forma, el art. 607.3 LEC dispone que deben ser acumuladas todas aquellas percepciones económicas que reciba el ejecutado, de manera que la suma resultante será la base sobre la que se deberán aplicar los porcentajes de embargabilidad

---

<sup>90</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, *La ejecución procesal civil*, cit., p. 144.

<sup>91</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, “Comentario al art. 607 LEC”, en AAVV, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 3.050.

<sup>92</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, “Comentario al art. 607 LEC”, en AAVV, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 3.050.

<sup>93</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, “Comentario al art. 607 LEC”, en AAVV, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 3.050.

previstos en el art. 607.2 LEC. El fundamento y razón de ser de este supuesto se encuentra en evitar que el demandado pueda burlar la traba decretada cuando perciba varias retribuciones, que consideraras por sí mismas, de forma aislada, resultarían inembargables por no superar los topes legales. Lo que se pretende en este caso es que se sume el importe neto de cada percepción, deducidos los descuentos a los que alude el art. 607.5 LEC<sup>94</sup>, para aplicar sobre el total obtenido los porcentajes de embargabilidad del art. 607.2 LEC.

La casuística que se puede encontrar en la práctica es variada, desde la percepción de dos o más sueldos por distintos empleadores, supuesto cada vez más habitual y frecuente en la sociedad actual dados los exigüos sueldos que se cobran, lo que obliga a muchas personas a buscar un segundo empleo para completar sus ingresos. Pero, también, otras combinaciones como el cobro de una prestación de desempleo junto con una pensión, el cobro de un sueldo junto con una pensión, entre otras<sup>95</sup>.

Además, el otro gran supuesto que contempla el art. 607.3 LEC cuando se refiere a la acumulación, bastante habitual también en la práctica, consiste en la posibilidad de acumular las retribuciones que perciban el ejecutado como las de su cónyuge cuando el régimen económico matrimonial no sea separación de bienes y rentas. En este caso, el fundamento de la acumulación se relaciona con la previsión del art. 541 LEC en relación con los art. 1.362 y 1.373 CC cuando permiten atacar los bienes del cónyuge no deudor ante la falta de patrimonio suficiente del deudor principal siempre y cuando se dé un requisito esencial, esto es, que no rija entre ellos un régimen económico matrimonial de separación de bienes y rentas. Esto es muy común, ya que el régimen económico matrimonial de gananciales es el régimen general aplicable en nuestro ordenamiento jurídico, a excepción de Catalunya.

---

<sup>94</sup> FONT DE MORA RULLÁN, Jaime, “La acumulación de salarios y otras prestaciones para su embargo: análisis jurisprudencial del art. 607.3 LEC”, *Revista de Derecho vLex*, núm. 162, noviembre de 2017, p. 2. Consultado en: <http://vlex.com/vid/acumulacion-salarios-prestaciones-embargo-697778941> (última vez visitado: 22 de abril de 2019).

<sup>95</sup> FONT DE MORA RULLÁN, Jaime, “La acumulación de salarios y otras prestaciones para su embargo: análisis jurisprudencial del art. 607.3 LEC”, cit., p. 2.

La carga de la prueba para acreditar que el régimen económico matrimonial por el que se rige el matrimonio es el de separación de bienes y rentas recae sobre el ejecutado y su cónyuge<sup>96</sup>, que bastará con algún documento del que resulte esa circunstancia, siempre que haga fe frente a terceros en cuanto a la fecha y al acto documentado<sup>97</sup>.

Aunque, con posterioridad al embargo, se produzca una modificación del régimen económico matrimonial, siguiendo lo establecido en el art. 1.317 CC, esta variación no puede perjudicar al ejecutante<sup>98</sup>. Por ello, se seguirá reteniendo la cantidad que hubiera resultado de aplicar la escala del artículo 607 LEC a la suma de las retribuciones de los dos cónyuges<sup>99</sup>.

Sin embargo, la acumulación de retribuciones prevista en el art. 607.3 deja de ser aplicable si, tras efectuarse el embargo, se admite a trámite una demanda de nulidad matrimonial, separación o divorcio, o se decretan medidas provisionales matrimoniales. Tampoco se puede seguir aplicando aquella acumulación de los ingresos de uno y otro cónyuge si recae sentencia mediante la que se declara la nulidad matrimonial, separación o divorcio. Asimismo, atendiendo a la razón de ser del art. 607.3 LEC, si en el momento del embargo existe una separación de hecho entre los cónyuges, no se podría efectuar la acumulación de retribuciones prevista en la norma, ya que el ejecutado no se beneficia, de hecho, de los ingresos de su cónyuge. Pero, de todas formas, incumbe al ejecutado o a su cónyuge la carga de acreditar debidamente la separación de hecho. Por otra parte, si se produce la

---

<sup>96</sup> En el mismo sentido, la jurisprudencia ha resuelto esta cuestión de forma unánime: AAP de Castellón, Sección 3ª, nº 87/2008, de 22 de febrero de 2008, rec. 647/2007 [ECLI:ES:APCS:2008:222A] y AAP Zamora, Sección 1ª, nº 55/2011, de 29 de julio de 2011, rec. 187/2011 [ECLI:ES:APZA:2011:70A].

<sup>97</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, “Comentario al art. 607 LEC”, en AAVV, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 3.051.

<sup>98</sup> En este sentido, AAP de Guadalajara, Sección 1ª, nº 37/2002, de 30 de abril de 2002, rec. 127/2002 [ECLI:ES:APGU:2002:17A].

<sup>99</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, “Comentario al art. 607 LEC”, en AAVV, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 3.051.

disolución de la sociedad de gananciales en el supuesto previsto en el art. 541.3 LEC, se entiende que tampoco se puede continuar efectuando acumulación de retribuciones establecidas en el art. 607.3 LEC<sup>100</sup>.

En la jurisprudencia se encuentra algún supuesto conflictivo sobre la aplicación de la acumulación, como es el caso del trabajo a tiempo parcial. Es necesario tener en cuenta que en el supuesto de que el ejecutante percibiera el salario de varios trabajos a tiempo parcial, entonces, siguiendo la acumulación del art. 607.3 LEC, se sumarían todas esas retribuciones y aquello que exceda del importe del SMI sería susceptible de embargo siguiendo la escala progresiva que establece el art. 607.2 LEC, pero esa acumulación no sucede cuando cada uno de los cónyuges percibe un salario por trabajo a tiempo parcial inferior al SMI o una pensión también inferior a esa cuantía, ya que sería absurdo que un trabajador que percibe al mes una cantidad equivalente al SMI a tiempo completo, no se le pueda embargar y en cambio, a otro que percibe menos de la mitad que aquel, por ser a tiempo parcial, sí se le pueda embargar cuando los dos tienen esos únicos ingresos al mes<sup>101</sup>.

Para el cálculo de la porción embargable, la determinación de la parte de sueldo o pensión que debe ser embargada ha de efectuarse por meses naturales, aplicando, por tanto, la cuantía mensual del SMI a las retribuciones que perciba el ejecutado a lo largo de cada mes natural<sup>102</sup>. Así, es necesario resaltar dos situaciones que pueden resultar conflictivas, como son: las rentas irregulares y las pagas extraordinarias.

Las rentas irregulares se tratan de retribuciones percibidas por el ejecutado, resultado de devengos irregulares en el tiempo, ya sea por que comprendan partidas invariables, o, en definitiva, no se sujeten a un ritmo constante en cuanto a su

---

<sup>100</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, “Comentario al art. 607 LEC”, en AAVV, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 3.051-3.052.

<sup>101</sup> AAP de Madrid, Sección nº 12, nº 824/2005, de 29 de noviembre de 2005, rec. 80/2005 [ECLI:APM:2005:11769A].

<sup>102</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, “Comentario al art. 607 LEC”, en AAVV, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 3.049.



devengo y cobro. Al no existir una periodicidad, resulta más difícil la aplicación de las previsiones legales, ya que si no atendemos al espacio temporal que ha originado el devengo de la retribución podría resultar situaciones injustas en trabajadores o pensionistas con mayores o menores cantidades embargables. Por eso, en el caso de que se obtengan rentas irregulares, con independencia del momento en que se produzca su pago, se habrá de entender al periodo de tiempo que pertenecen, es decir, al espacio temporal en que se han generado, debiendo el ejecutado probar dichos extremos<sup>103</sup>.

De forma similar, en el caso del embargo de las pagas extraordinarias, es necesario tener en cuenta varios supuestos para evitar desigualdades: es posible que nos encontremos con el supuesto de que un trabajador perciba un sueldo menor al SMI, pero en los meses en los que cobra la gratificación extraordinaria supere esa cantidad, al compararlo con el caso otro trabajador que percibe el mismo sueldo, pero con las pagas extraordinarias prorrateadas, es posible ver que si solamente tenemos en cuenta las percepciones abonadas mensualmente, el trabajador del primer supuesto sufrirá embargos superiores, ya que en aquellos meses que se perciben las pagas extraordinarias la cuantía líquida embargable sería mayor.

De esta forma, para evitar estas desigualdades, el SMI no puede considerarse susceptible de individualización por mensualidad concretas, sino que ha de atenderse a su cómputo anual, pues en otro caso la embargabilidad o inembargabilidad del sueldo o pensión quedaría condicionada a la aleatoria forma en que estuviera diseñado el devengo mensual concreto, y no a las posibilidades económicas reales del sujeto pasivo, produciéndose el ilógico jurídico de gravar con el embargo al perceptor de un salario o pensión que, aunque su importe anual global por todos los conceptos no superase el SMI determinado para esa anualidad específica, obtuviera en los meses concretos en que cobra las pagas extras unas rentas superiores al SMI mensual, y por el contrario, no se gravaría el embargo a un trabajador o pensionista que ganando lo mismo, o incluso más que el anterior, recibiera las pagas

---

<sup>103</sup> ACHÓN BRUÑÉN, M.<sup>a</sup> José, “La problemática del embargo de sueldos y pensiones”, *La Ley Digital*, de 15 de febrero de 2019, p. 6.

extraordinarias prorrateadas, adicionado a cada mes la parte proporcional de dichas pagas, de modo que ninguno de los cobros mensuales superasen el SMI de un mes concreto<sup>104</sup>. Por eso, para evitar ese tratamiento desigual, debe estarse al SMI anual para aplicar los porcentajes recogidos en el art. 607 LEC, o lo que es lo mismo, estar a las fechas de devengo de la percepción y no a la fecha de efectivo cobro<sup>105</sup>.

Por último, el cálculo de la cuantía embargable de los ingresos del ejecutado que procedan de actividades profesionales y mercantiles autónomas que regula el art. 607.6 LEC también puede plantear problemas. Es posible que no se conozcan con exactitud el importe de esos ingresos, de ese modo, habrá que intentar efectuar un cálculo lo más aproximado posible de aquellos ingresos, para aplicar a la cantidad resultante la escala del art. 607 LEC. A tal fin, podrán utilizarse los datos ya disponibles, en su caso, en el momento del embargo, y los que se vayan consiguiendo después. En función de las informaciones que se obtengan con posterioridad al embargo, se podrán introducir modificaciones en el cálculo inicial de la cantidad embargable y no hay ningún tipo de inconveniente en variar la cantidad retenida cuantas veces sean necesarias. A estos efectos, aparte de la información que puedan proporcionar el ejecutado y otros terceros, tienen especial relevancia los datos que remita la Administración tributaria<sup>106</sup>.

## **9. Modificación de los porcentajes**

El apartado cuarto del art. 607 LEC prevé que, en atención a las cargas familiares del ejecutado, el letrado de la administración de justicia pueda rebajar, de un diez a un quince por ciento, los porcentajes de embargabilidad establecidos con carácter general en el art. 607.2 LEC, salvo que se traten de cantidades que excedan de un

---

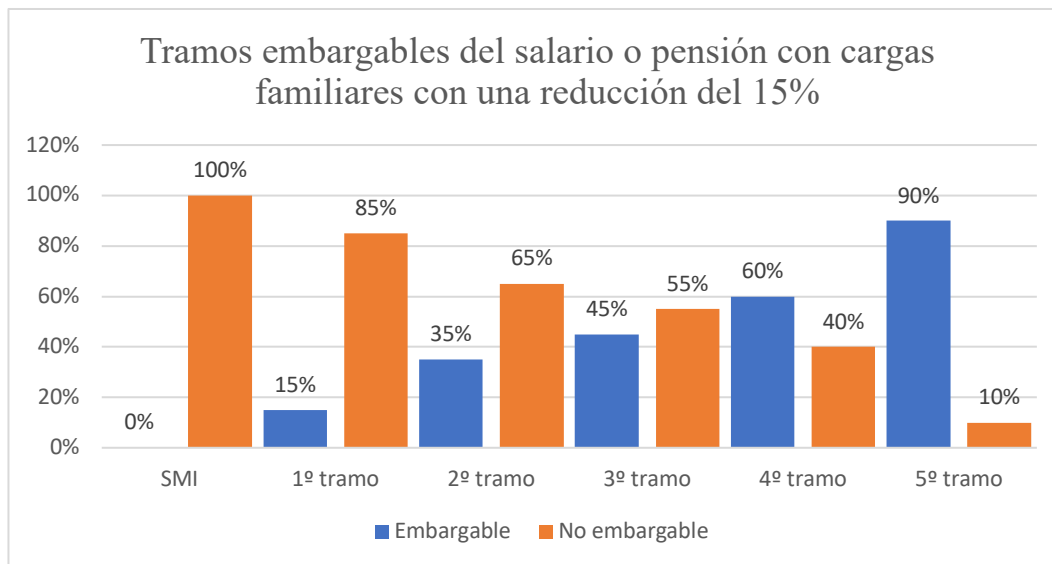
<sup>104</sup> SANESTEBAN GONZÁLEZ-ACEVEDO, Marta, “El embargo de salarios y pensiones: normativa y jurisprudencia”, Trabajo de Fin de Máster, *Universidade da Coruña, Facultade Ciencias do traballo*, 2016, p. 27.

<sup>105</sup> AAP de Palma de Mallorca, Sección 4ª, nº 119/2000, de 2 de mayo, rec. 613/1999 [ECLI:APIM:2000:157A].

<sup>106</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, “Comentario al art. 607 LEC”, en AAVV, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 3.055. A su vez, CACHÓN CADENAS, Manuel, *La ejecución procesal civil*, cit., p. 144.

quinto salario mínimo interprofesional, que en cuyo caso el porcentaje embargable será del noventa por ciento sin posibilidad de rebaja alguna.

Es decir, en el caso de una reducción del 15%, los porcentajes de embargo podrían quedar reducidos los porcentajes de embargo conforme a la siguiente escala:



Fuente: Art. 607.5 LEC. Elaboración propia.

Se trata de una facultad discrecional del letrado de la administración de justicia, pero si no se aplica de oficio la reducción mencionada, el ejecutado puede pedir que decrete dicha rebaja.

Asimismo, y en tanto que la inembargabilidad parcial del sueldo obedece a la necesidad de asegurar la subsistencia de ejecutado, es posible plantearse la posibilidad de embargar una cantidad mayor en el caso de que se acreditare que lo malgasta en bienes o actividades que, lejos de ser imprescindibles para atender con dignidad su subsistencia, resultaren superfluas, lujosas o incluso dañinas para su salud, pero una respuesta positiva es posiblemente muy difícil un acomodo en la ley<sup>107</sup>.

<sup>107</sup> ACHÓN BRUÑÉN, M.<sup>a</sup> José, “La problemática del embargo de sueldos y pensiones”, p. 6.

Por otra parte, cabe tener en cuenta la regulación empleada por el art. 608 LEC que establece que no regirán las disposiciones sobre la embargabilidad de sueldos, pensiones y otras retribuciones análogas del art. 607 LEC cuando el embargo se practique para hacer efectiva una obligación legal de pago de alimentos. En estos casos, el juez, atendiendo a las circunstancias que concurran en cada caso, ha de fijar la cantidad que deba ser embargada y retenida. Se trata, por tanto, de una excepción prevista en favor de quienes tengan derecho a percibir alimentos en virtud de alguna disposición legal<sup>108</sup>.

El fundamento de esta excepción se encuentra en que, en la mayor parte de los casos, el pago de prestaciones alimenticia acordadas en procesos matrimoniales o, en general, en juicios de alimentos, cuando haya necesidad de acudir a la ejecución de la sentencia o resolución que establezca las obligaciones de abonar dichos alimentos, se efectúa mediante el embargo del sueldo que percibe la persona que deba pagarlos, que hasta la separación o divorcio, el cónyuge o los hijos en cuyo favor se acuerda la pensión alimenticia estaban viviendo del sueldo del otro cónyuge<sup>109</sup>.

Tal y como establece el art. 608 LEC, el ámbito de aplicación de la excepción que regula se extiende desde las obligaciones legales de satisfacer las prestaciones alimenticias, los pronunciamientos de las sentencias dictadas en procesos de nulidad, separación o divorcio sobre alimentos debidos al cónyuge o a los hijos o por los decretos o escrituras públicas que formalicen el convenio regulador acordado por ambos cónyuges. Incluso aunque la resolución por la que se aprueba la prestación de alimentos haya sido impugnada, resulta aplicable el art. 608 LEC<sup>110</sup>. Por el contrario, el art. 608 LEC no rige cuando los alimentos hayan sido

---

<sup>108</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, “Comentario al art. 608 LEC”, en AAVV, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 3.059.

<sup>109</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, “Comentario al art. 608 LEC”, en AAVV, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 3.059.

<sup>110</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, “Comentario al art. 608 LEC”, en AAVV, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 3.060.

fijados en virtud de contrato ni, en general, en aquellos casos en que no vengan establecidos por una disposición legal, por lo que resultan aplicables las limitaciones de embargabilidad previstas en el art. 607.1 LEC. A su vez, tampoco puede ser aplicado el art. 608 LEC en los supuestos en que se intente hacer efectiva una obligación distinta del pago de alimentos, aunque los titulares del correspondiente derecho sean el cónyuge o los hijos del ejecutado, por lo que en estos casos son aplicables las limitaciones de embargabilidad establecidas por el art. 607 LEC<sup>111</sup>.

Una de las dudas que surge en esta materia se trata de si el ámbito de aplicación del art. 608 LEC se extiende a las pensiones compensatorias al ex cónyuge. Estas compensaciones se encuentran reguladas en el art. 97 CC y en el art. 233-14 del Codi Civil de Catalunya. Se pueden definir como aquella prestación económica que recibe el cónyuge, por parte del otro ex cónyuge, tras producirse el divorcio o la separación y tiene como objetivo compensar la situación de desigualdad o desequilibrio económico sufrido por alguno de los esposos como consecuencia de esta ruptura. De esta forma, se diferencian de las pensiones alimenticias, debido a que estas pretenden proveer lo necesario para atender las exigencias vitales, tomando como base de su otorgamiento la necesidad de quien la solicita y los recursos del obligado para prestarla. Las prestaciones compensatorias al excónyuge van un paso más allá de las pensiones alimenticias, ya que no solamente está destinada a cubrir las necesidades vitales, sino que también, y fundamentalmente, a restablecer el perjuicio económico derivado de la ruptura de la vida conyugal, con posibilidad de renuncia por los cónyuges.

No es pacífica la opinión respecto de la aplicación del art. 608 LEC a estas prestaciones, ya que existen dos líneas jurisprudencias sobre la cuestión. Por un lado, los que afirman que no es posible aplicar el art. 608 LEC a la pensión

---

<sup>111</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, “Comentario al art. 608 LEC”, en AAVV, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 3.060.

compensatoria<sup>112</sup> y, por lo tanto, que se aplican los límites de embargabilidad del art. 607 LEC, que fundamenta esta idea en su propia naturaleza, ya que se configura como un derecho a la compensación y no como uno de alimentos. Por otro lado, están los que entienden que la protección dispensada por el art. 608 LEC alcanza igualmente a la pensión compensatoria<sup>113</sup>, debido a que posee una naturaleza mixta y una doble finalidad: una equilibradora derivada de la crisis matrimonial y otra alimenticia a favor del ex cónyuge.

Además, otro supuesto de modificación de los porcentajes de embargabilidad de los sueldos y pensiones se regula en el art. 1 del RDL 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y simplificación administrativa.

A causa de la crisis económica y financiera que ha azotado a miles de ciudadanos, muchos de ellos se han visto abocados en situaciones de especial dificultad para aquellos que contrajeron préstamos hipotecarios en los momentos de mayor valoración de los inmuebles provocando la imposibilidad de satisfacer sus obligaciones de pago. De esta forma, mediante la aprobación de este RDL, se intenta incorporar medidas para proteger a aquellas familias con menos ingresos y que han perdido su vivienda habitual a causa de éstas difíciles circunstancias económicas. El art. 1 del RDL 8/2011 eleva la cantidad inembargable que establece el art. 607.1 LEC cuando el precio obtenido por la venta de la vivienda habitual

---

<sup>112</sup> Véase: AAP de Barcelona, Sección 18ª, nº. 812/2006, de 18 de julio, rec. 814/2005 [ECLI:ES:APB:2006:5254A], AAP de Palma de Mallorca, Sección 4ª, nº. 26/2010, de 24 de febrero, rec. 561/2009 [ECLI:APIB:2010:139A], AAP de Bizkaia, Sección 6ª, nº. 90993/2010, de 15 de noviembre, rec. 510/2010 [ECLI:APBI:2010:1453A], AAP de Sevilla, Sección 2ª, nº. 213/12, de 11 de octubre, rec. 2823/2011 [ECLI:APSE:2012:3667A], entre otras.

<sup>113</sup> Véase: AAP de Madrid, Sección 22ª, de 3 de junio 2003, rec. 58/2003 [ECLI:ES:APM:2003:1765A], AAP de Zaragoza, Sección 2ª, nº. 411/2011, de 12 de julio de 2011, rec. 280/2011 [ECLI:ES:APZ:2011:1710A], AAP de Bizkaia, Sección 4ª, nº. 334/2003, de 20 de mayo de 2003, rec. 8/2003 [ECLI:APBI:2003:67A].

hipotecada en un procedimiento de ejecución hipotecaria sea insuficiente para cubrir el crédito garantizado.

De este modo, si con carácter general, la cuantía inembargable se trata del SMI según el art. 607.1 LEC, a partir de lo dispuesto por esta norma y, exclusivamente, para los deudores hipotecarios que han perdido su vivienda habitual, ese mínimo del SMI inembargable, se aumenta en un 50% más y un 30% adicional por cada familiar de su núcleo que no perciba ingresos regulares superiores a dicho SMI. Los sueldos, pensiones o cualquier retribución equiparable según el art. 607 LEC que sean superiores al SMI y, en su caso, a las cuantías que resulten de aplicar la regla para la protección del núcleo familiar, se embargarán conforme a la escala prevista en el art. 607.2 LEC.

Por último, cabe plantearse la posibilidad de la autonomía de la voluntad entre el ejecutado y el ejecutante para poder modificar estos porcentajes. La vigente LEC no lo prohíbe expresamente, a diferencia del art. 1.452 de la pretérita LEC que establecía la prohibición de un embargo superior sobre los sueldos, pensiones o cualquier otra retribución análoga mediante convenios particulares entre el deudor y sus acreedores. Si bien es cierto que el art. 592.1 LEC contempla la posibilidad de acuerdos en relación con el orden de bienes a embargar, las normas que prescriben la inembargabilidad son de *ius cogens*, de este modo, las reglas sobre inembargabilidad no pueden someterse a la autonomía de la voluntad<sup>114</sup>.

## **10. La concurrencia de embargos y el reembolso**

En la práctica cotidiana es muy común que el ejecutado al que le han sido trabadas sus retribuciones haya contraído otras responsabilidades, a resultas de las cuales se acuerde un nuevo embargo sobre las mismas retribuciones<sup>115</sup>, esto es conocido como el reembolso o la doble traba. Esta figura se encuentra regulada en el art. 610 LEC y tiene lugar cuando se traban bienes o derechos que ya han sido embargados

---

<sup>114</sup> ACHÓN BRUÑÉN, M.<sup>a</sup> José, “La problemática del embargo de sueldos y pensiones”, p. 4.

<sup>115</sup> PEDRAJAS MORENO, Abdón, *El embargo sobre retribuciones (su práctica y sus límites)*, cit., p. 237.

en otro u otros procesos. En tal caso, lo más habitual en la práctica, con diferencia, es que el primer embargo haya alcanzado toda la parte del sueldo que resulte embargable según la escala legal prevista en el art. 607.2 LEC<sup>116</sup>. Los efectos de reembolso quedan sometidos al principio de prioridad, ya que el segundo embargo queda subordinado a los resultados del primer embargo. No obstante, si el primer embargo se extingue antes de que se lleve a efecto la transmisión forzosa en ese primer proceso, el reembolso se convierte en un embargo ordinario, de manera que, tal y como establece el art. 610.2 LEC, el acreedor reembargante pasa a tener, en relación del sueldo o pensión, las expectativas procesales y posibilidades de actuación procesal que le corresponderían al primer reembargante<sup>117</sup>.

De esta forma, el criterio jurisprudencial predominante en la práctica consiste en posponer totalmente los embargos ulteriores, de manera que, mientras no se extinguiera el primer embargo, no se podría retener cantidad alguna por esos embargos posteriores. Así, mediante este criterio, la única cuantía que puede ser objeto de retención es la correspondiente al primer embargo. Así, siguiendo con el ejemplo anterior, Esta solución, entonces, entraña una aplicación estricta de principio de prioridad: el primer acreedor que consigue embargar es quien cobrará su derecho de crédito, mientras que los demás acreedores deberán esperar. Todo ello sin perjuicio de que los acreedores posteriores puedan interponer una tercera de mejor derecho si su crédito es preferente al del primer embargante<sup>118</sup>.

Sin embargo, algunos tribunales han seguido un criterio distinto que consiste en ordenar también la retención de una parte del sueldo a resultas de los embargos posteriores, ya que se entiende que la escala legal de embargabilidad podía ser aplicada de nuevo, a resultas de los embargos ulteriores, sobre la parte de sueldo

---

<sup>116</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, *La ejecución procesal civil*, cit., p. 145.

<sup>117</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, “Comentario al art. 610 LEC”, en AAVV, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 3.066.

<sup>118</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, *La ejecución procesal civil*, cit., p. 145.



que había quedado libre del primer embargo, dejando siempre libre de traba la cuantía correspondiente al SMI<sup>119</sup>.

Aunque todavía persisten dudas sobre la cuestión mencionada, el primero de los dos criterios jurisprudenciales expuestos se ha convertido en tan abrumadoramente mayoritario que casi está rozando la unanimidad<sup>120</sup>.

## **11. Extinción del embargo y casos de sustitución del embargo**

El art. 584 LEC regula el requisito relativo a la suficiencia de los bienes sobre los que ha de recaer el embargo. Este embargo debe trabarse sobre bienes suficientes para cubrir la cuantía por la que se ha despachado ejecución, de esta forma, el valor total del conjunto de bienes afectados a la ejecución no debe ser inferior a la cantidad por la que se haya decretado la ejecución. A su vez, la suficiencia del embargo, también, significa que el valor total de dichos bienes ha de ajustarse lo más posible a la suma por la que se ha despachado ejecución<sup>121</sup>.

De forma complementaria, el art. 612 LEC regula la modificación del embargo, ocupando un lugar destacado la mejora y la reducción de la traba que resultan ser mecanismos procesales de control del requisito relativo a la suficiencia de los bienes embargados<sup>122</sup>.

A efectos de la mejora del embargo, cuando se haya procedido al embargo de unos determinados bienes, pero que éstos resulten insuficientes para cubrir la cuantía por la que se ha despachado ejecución, se podrá proceder a un nuevo embargo sobre otros bienes del deudor. Normalmente, el embargo que se practique en virtud de la resolución que ha acordado la mejora de la traba recaerá sobre bienes distintos de

---

<sup>119</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, *La ejecución procesal civil*, cit., p. 145-146.

<sup>120</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, *La ejecución procesal civil*, cit., p. 146.

<sup>121</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, “Comentario al art. 612 LEC”, en AAVV, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 2.829.

<sup>122</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, “Modificación y extinción del embargo” en Ejecución de sentencias civiles (II). La vía de apremio, *Cuadernos de Derecho Judicial*, cit., p. 246.

los embargados previamente en el mismo proceso. Pero, si se trata de elementos patrimoniales divisibles y el embargo inicial se ha llevado a efecto solamente sobre una parte del bien o derecho en cuestión, la mejora del embargo puede recaer sobre la parte restante de ese mismo bien o derecho<sup>123</sup>. Por ejemplo, en el caso de que la cuantía que resulte embargable del sueldo o pensión sea inferior a la cantidad por la que se ha despachado ejecución, se podrá proceder al embargo de otros bienes del deudor o, en el caso que no disponga de otros, será necesario esperar a que el deudor reciba una nueva mensualidad para poder proceder a embargarle de nuevo.

Para que pueda tener lugar la mejora del embargo, el art. 612.1 LEC exige expresamente que la insuficiencia de los bienes inicialmente embargados se deba a un cambio de circunstancias. Este precepto incluye, sin duda, las causas sobrevenidas con posterioridad a la realización del embargo o de los embargos trabados anteriormente en el proceso de ejecución, así como, los casos en que la insuficiencia sea originaria, es decir, que ya exista en el momento procesal en que concluye la práctica del embargo o de los sucesivos embargos realizados para dar cumplimiento a la resolución por la que se ha despachado la ejecución<sup>124</sup>.

Para que podamos hablar como tal de una petición de mejora del embargo por parte del ejecutante, esta solicitud de mejora deberá formularse después de haberse dado por practicado en su integridad el embargo dirigido a cumplir la resolución por la que se despachó la ejecución<sup>125</sup>.

Además, la mejora del embargo puede ser decretada, aunque continúen embargados todos los bienes trabados previamente en el mismo proceso, siempre que resulten

---

<sup>123</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, “Modificación y extinción del embargo” en Ejecución de sentencias civiles (II). La vía de apremio, *Cuadernos de Derecho Judicial*, Escuela Judicial/Consejo General del Poder Judicial, p. 250-251.

<sup>124</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, “Comentario al art. 612 LEC”, en AAVV, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 3.077.

<sup>125</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, “Comentario al art. 612 LEC”, en AAVV, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 3.077.

insuficientes para cubrir la cuantía de la ejecución. Asimismo, la mejora del embargo resulta procedente cuando tan sólo existe el riesgo objetivo de que el embargo desaparezca total o parcialmente, porque, por ejemplo, se ha interpuesto una tercería de dominio respecto de los bienes embargados o de algunos de ellos, o se cierne sobre la ejecución el peligro de que los bienes embargados lleguen a ser insuficientes en el futuro, ya que se ha promovido una tercería de mejor derecho<sup>126</sup>.

Por otro lado, puede suceder que en el periodo de tiempo que media entre el embargo inicial y la mejora de la traba, se hayan embargado en otro u otros procesos los bienes sobre los que recae el embargo practicado en virtud de la mejora. En otras palabras, cabe que la ampliación de la traba consista, simplemente, en un reembargo de bienes que ya han sido trabados en otro u otros procedimientos. En tal caso y por el juego del principio de prioridad recogido en el art. 610 y 613 LEC el embargo o los embargos practicados en los otros procesos tienen referencia sobre el embargo que se lleve a efecto, como consecuencia de la resolución que decreta la mejora de la traba<sup>127</sup>.

De esta forma, para acabar, mejorar el embargo no supone introducir una simple modificación u alteración en el embargo verificado previamente en el mismo procedimiento. Así, el embargo inicial y el que tiene lugar en cumplimiento de la resolución que ordena la mejora, aunque forman parte de mismo procedimiento son embargos distintos, que se llevan a efecto en momentos procesales diversos y que recaen, asimismo, sobre bienes diferentes<sup>128</sup>.

---

<sup>126</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, “Modificación y extinción del embargo” en Ejecución de sentencias civiles (II). La vía de apremio, *Cuadernos de Derecho Judicial*, Escuela Judicial/Consejo General del Poder Judicial, pp. 253-254.

<sup>127</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, “Comentario al art. 612 LEC”, en AAVV, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 3.080.

<sup>128</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, “Comentario al art. 612 LEC”, en AAVV, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 3.080.

En cuanto a la reducción del embargo, se entiende como un supuesto de alzamiento parcial del embargo, basado en que el valor del conjunto de bienes embargados resulta manifiestamente excesivo respecto de la cuantía de la ejecución. Reducir el embargo supone decretar la extinción de la traba sobre alguno o algunos de los bienes afectados en el procedimiento que se trate, manteniendo el embargo sobre los restantes bienes por ser éstos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución. De esta forma, en el ámbito del embargo de sueldos y pensiones, será más difícil que nos encontremos en este caso al tratarse de cuantías líquidas<sup>129</sup>.

Entre las modificaciones del embargo a las que alude el art. 612 LEC, el supuesto más relevante es el de la sustitución de la traba con independencia de las diversas denominaciones que se utilizan para hacer referencia a esta figura. La sustitución del embargo tiene lugar cuando se dicta una resolución mediante la que, por parte, se acuerda el alzamiento de la traba recaída previamente sobre alguno o algunos bienes y al mismo tiempo se decreta el embargo de otro u otros bienes. A la hora de llevarse a efecto el embargo, cabe la posibilidad de que se vulneren los criterios relativos a la prelación de bienes que establece el art. 592 LEC. Si esta alteración se ha producido sin el conocimiento o con la oposición de alguna de las partes, se les reconocerá a éstas la facultad de que pidan el alza de la traba practicada, de esta forma, se embargarán aquellos bienes que sean preferentes de acuerdo con aquel orden de prelación<sup>130</sup>.

El ejecutado podrá designar los bienes para el nuevo embargo, que además de ser preferentes deberán resultar suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución. La sustitución del embargo exige resolución judicial que la decrete, mientras que la sustitución del objeto del embargo, que puede obedecer a causas materiales o jurídicas no requiere resolución expresa. En el caso de que se acuerde la sustitución

---

<sup>129</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, “Modificación y extinción del embargo” en Ejecución de sentencias civiles (II). La vía de apremio, *Cuadernos de Derecho Judicial*, Escuela Judicial/Consejo General del Poder Judicial, pp. 264-265.

<sup>130</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, “Comentario al art. 612 LEC”, en AAVV, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., p. 3.082.

del embargo, la traba sustituida queda totalmente privada de eficacia jurídica, y en su lugar, surge un nuevo embargo, que producirá efectos jurídicos desde la fecha que se practique, y no desde la fecha en que se había realizado el embargo sustituido<sup>131</sup>.

## **12. El incumplimiento por parte del pagador de su deber de retener el sueldo del ejecutado**

Cuando se acuerda el embargo de sueldo o pensión del ejecutado se remite por el Letrado de la Administración de Justicia una orden a la persona, entidad u oficina pagadora a fin de que ingrese regularmente en la cuenta de Depósitos y Consignaciones del Juzgado la cantidad oportuna embargable conforme a la escala del art. 607.2 LEC. Además, la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, en el art.15 apartado 250, el Letrado de la Administración de Justicia encargado de la ejecución podrá acordar incluso que la cantidad embargada se entregue directamente a la parte ejecutante, en la cuenta que esta designe, en cuyo caso, tanto la persona o entidad que practique la retención y entrega como el ejecutante deberán informarle trimestralmente sobre las sumas remitidas y recibidas, respectivamente, quedando a salvo en todo caso las alegaciones que el ejecutado pueda formular, ya sea porque considere que la deuda se halla abonada totalmente o porque las retenciones o entregas no se estén realizando conforme a lo acordado por el Letrado de la Administración de Justicia<sup>132</sup>.

En el caso de que la persona, entidad u oficina pagadora desatienda la orden de retención, conforme lo previsto en el art. 591.2 LEC, se le podrán imponer por el Juez multas coercitivas periódicas, previa audiencia de los interesados, que se mantendrán hasta que proceda al cumplimiento de lo ordenado o se termine la ejecución. Además, podría resultar adecuado la aplicación del art. 1.165 CC

---

<sup>131</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, “Comentario al art. 612 LEC”, en AAVV, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, cit., pp. 3.082-3.083.

<sup>132</sup> ACHÓN BRUÑÉN, M.<sup>a</sup> José, “La problemática del embargo de sueldos y pensiones”, p. 11.

conforme al cual “no será válido el pago hecho al acreedor por el deudor después de habersele ordenado judicialmente la retención de la deuda”, por lo que habiendo realizando un acto inválido, no se considerará liberado de su obligación, pudiendo el Juzgado reclamarle la parte correspondiente de los sueldos ya pagados al deudor para que los ingrese en la cuenta de Depósitos y Consignaciones o, en su caso, en la del ejecutante, sin perjuicio del derecho de repetición de dicho pagador contra el ejecutado en aras de no ocasionar un enriquecimiento injusto<sup>133</sup>.

Otro supuesto distinto será el caso en que la entidad pagadora no abone tan siquiera el sueldo al ejecutado, a consecuencia de la situación de insolvencia de la empresa, situación de concurso o similar, en cuyo caso, el ejecutante podrá embargar el crédito del ejecutado que conforme el art. 32 ET tendrá carácter privilegiado. Dicho embargo estará sometido a la protección de inembargabilidad parcial, por lo que en el momento del cobro se le habrán de aplicar los porcentajes del art. 607.2 LEC<sup>134</sup>.

De esta forma, en la práctica, cuando una orden de embargo de salarios llega a una empresa, se trata de una situación problemática no solamente para el trabajador que ve embargado su salario, sino que también para el empresario, debido a que si se trata de una empresa de grandes dimensiones tendrá un departamento jurídico con conocimiento en esta materia y, por lo tanto, se encargará de gestionarlo, mientras que si se trata de una pequeña o mediana empresa, que se trata de la tipología de empresas más común en nuestro tejido industrial, seguramente este departamento no exista y el empresario no tendrá conocimientos en esta materia, de este modo, deberá acudir a asesoramiento, lo que le provocará unos gastos, de los cuales, no le generarán ningún beneficio, sino que únicamente tratan de cumplir con las exigencias legales que le son impuestas.

---

<sup>133</sup> ACHÓN BRUÑÉN, M.<sup>a</sup> José, “La problemática del embargo de sueldos y pensiones”, p. 11-12.

<sup>134</sup> ACHÓN BRUÑÉN, M.<sup>a</sup> José, “La problemática del embargo de sueldos y pensiones”, p. 12.

### **13. Tercería de mejor derecho sobre el embargo de sueldos, salarios y pensiones**

La tercería de mejor derecho se trata de una figura procesal recogida en el art. 614 LEC. Con arreglo a este artículo, quien afirme que le corresponde un derecho a que su crédito sea satisfecho con preferencia al del acreedor ejecutante podrá interponer demanda de tercería de mejor derecho.

Los propios efectos del embargo crean a favor del ejecutante un *ius prioritatis*, de manera que la cantidad que se obtenga con el embargo de sueldos y pensiones ha de ser destinada, en primer lugar, a satisfacer a dicho ejecutante el importe de su crédito, los intereses devengados durante la ejecución y las costas que le hubiera causado la misma. Sin embargo, ese carácter de *ius prioritatis* que tiene el ejecutante, tiene un carácter meramente provisional o condicional, ya que se mantiene en pie mientras que no aparezca otro acreedor del ejecutado que se interponga con éxito una tercería de mejor derecho, basándose en que, conforme al derecho sustantivo, su crédito es preferente<sup>135</sup>.

De esta forma, la demanda se tramitará por el proceso ordinario y se presentará ante el órgano judicial que tramita la ejecución forzosa desde el momento en que se produzca el embargo del bien y antes de que se entregue al ejecutante la cantidad embargada. Así, para que la tercería de mejor derecho pueda prosperar, es necesario que el crédito del tercerista sea preferente al del ejecutante. Si se trata de créditos con el mismo rango crediticio, la demanda de tercería ha de ser desestimada, ya que el tercerista no habrá podido excluir el *ius prioritatis* que el embargo otorga al ejecutante<sup>136</sup>.

### **14. Conclusiones**

Tras el análisis exhaustivo de la problemática del embargo de sueldos y pensiones se han llegado a las siguientes conclusiones:

---

<sup>135</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, *La ejecución procesal civil*, cit., p. 263.

<sup>136</sup> CACHÓN CADENAS, Manuel, *La ejecución procesal civil*, cit., p. 263.

- I. El salario como fuentes de ingresos habitual para el conjunto de la población, acompañado de las pensiones y otras retribuciones, adquieren una gran relevancia en nuestro ordenamiento jurídico debido a su función económico-social de sustentación de la mayor parte de los ciudadanos, por eso, el legislador establece mecanismos de protección tendentes a garantizar su íntegra percepción por parte de los trabajadores en situaciones de normalidad y en casos en los que se deba proceder a su traba adquiere la función de salvaguardar la percepción de unos ingresos adecuados para poder cumplir con sus necesidades vitales y las de su familia.
- II. Con este fin, el legislador en el art. 607 LEC y 27.2 TRLET instaure la inembargabilidad parcial de los sueldos y pensiones. De esta forma, se establece como inembargable de forma absoluta la cuantía del SMI, mientras que la cuantía que sobrepasase de ese límite será embargable conforme los porcentajes establecidos en la escala progresiva del art. 607.2 LEC.
- III. Sin embargo, el ordenamiento jurídico atendiendo a la multitud de circunstancias que pueden padecer los ciudadanos, establece modificaciones a las cuantías embargables e inembargables anteriormente establecidas. El art. 607. 4 LEC atendiendo a las cargas familiares, establece una rebaja de entre un diez y un quince por ciento de los porcentajes de embargabilidad regulados en el art. 607.2 LEC, el art. 1 del RDL 8/2011 siendo consciente de los estragos de la crisis económica y financiera sobre las familias con cargas familiares, en los caos en que el precio obtenido por la venta de la vivienda habitual hipotecada en un procedimiento de ejecución hipotecaria sea insuficiente para cubrir el crédito garantizado, se elevan las cantidades inembargables del art. 607.2 LEC a un cincuenta por ciento más y un treinta por ciento adicional por cada familiar de su núcleo de familia que no perciba ingresos regulares superiores al SMI.



- IV. Por otro lado, el art. 608 LEC atendiendo al caso en que el embargo se efectúe para hacer efectiva una obligación legal de alimentos, que en cuyo caso, dejan de regir las disposiciones del art. 607 LEC respecto las cantidades embargables e inembargables, dejando al juez que fije la cantidad que debe ser embargada y retenida dependiendo de las circunstancias que concurran en cada caso.
- V. De esta forma, es posible ver que la regulación del embargo del sueldo, pensiones y otras retribuciones se trata de una regulación que ha atendido a circunstancias sociales con gran relevancia, como pueden ser las cargas familiares o la pérdida de la vivienda habitual en familias vulnerables, y ha modulado los porcentajes de embargabilidad de forma muy acertada.
- VI. Sin embargo, como opinión personal, creo que la regulación de esta materia debería ir un paso más allá, configurándose la escala de embargabilidad del art. 607.2 LEC como una orientación, ya que cada circunstancia individual está sometida a factores sociales, familiares y profesionales diferentes, por lo que los jueces deberían ser quien, atendiendo a éstas circunstancias, en último término, modularan los porcentajes de embargabilidad con el objetivo de que el deudor y su familia obtuvieran unos ingresos suficientes para cubrir sus necesidades vitales y vivir con dignidad, ya que dependiendo de la cantidad fijada como SMI puede ser que estos porcentajes no se adecuen a este objetivo.
- VII. Así, la decisión de los jueces relativa al porcentaje de embargabilidad individual deberá estar sometida siempre al necesario equilibrio demandado por el Tribunal Constitucional entre la protección del deudor mediante la inembargabilidad y el derecho del acreedor a cobrar su derecho de crédito.

## 15. Bibliografia

ACHÓN BRUÑÉN, M.<sup>a</sup> José, “La problemática del embargo de sueldos y pensiones”, *La Ley Digital*, de 15 de febrero de 2019.

AAVV, *Comentarios a las Leyes Laborales. El Estatuto de los Trabajadores*, de BORRAJO DACRUZ, Efreñ (dir.), Ed. Edersa, Tomo VI, Madrid, 1982.

AAVV, *Derecho de la Seguridad Social*, de Roqueta Buj, Remedios y García Ortega, Jesús (dir.), Ed. Tirant lo Blanch, 7<sup>a</sup> edición, Valencia, 2018.

BENAVIDES VICO, Antonio, *Manual Práctico de Seguridad Social*, Asepeyo, Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya, Volumen I, Barcelona, 2003.

CACHÓN CADENAS, Manuel, *El embargo*, Librería Bosch, primera edición, Barcelona, febrero, 1991.

CACHÓN CADENAS, Manuel, *La ejecución procesal civil*, Ed. Atelier, segunda edición, Barcelona, 2018.

CACHÓN CADENAS, Manuel, “Comentario al art. 607 LEC” en AAVV, *Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, de Lorca Navarriete, Antonio María (dir.), Ed. Lex Nova, tomo III, Valladolid, 2000.

CACHÓN CADENAS, Manuel, “Modificación y extinción del embargo” en Ejecución de sentencias civiles (II). La vía de apremio, *Cuadernos de Derecho Judicial*, Escuela Judicial/Consejo General del Poder Judicial.

CARRERAS LLANSANA, Jorge, *El Embargo de bienes*, Ed. Bosch, Barcelona, 1957.

CASERO LINARES, Luis, *El embargo de la Ley de Enjuiciamiento civil*, Ed. Bosch, colección práctica jurídica, 2ª edición, Barcelona, 2012.

FONT DE MORA RULLÁN, Jaime, “La acumulación de salarios y otras prestaciones para su embargo: análisis jurisprudencial del art. 607.3 LEC”, *Revista de Derecho vLex*, núm. 162, noviembre de 2017. Consultado en: <http://vlex.com/vid/acumulacion-salarios-prestaciones-embargo-697778941> (última vez visitado: 22 de abril de 2019).

FERNANDEZ BALLESTEROS, Miguel Ángel, *El proceso de ejecución*, Ed. Romargraf. Barcelona, 1982.

GÓMEZ SÁNCHEZ, Jesús, *La ejecución civil (Aspectos teóricos y prácticos del libro Tercero de la Ley de Enjuiciamiento Civil)*, Ed. Dykinson, Madrid, 2002.

GUASP DELGADO, Jaime y ARAGONESES ALONSO, Pedro, *Derecho procesal civil. Tomo II: Parte Especial: procesos declarativos y de ejecución*, Ed. Civitas, Madrid, 2006.

LLOMPART BENNÀSSAR, Magdalena, *El salario: concepto, estructura y cuantía*, Ed. La Ley, 1ª edición, 2007.

LÓPEZ AMEZUA, Javier, “Salario Mínimo Interprofesional”, Trabajo de Fin de Grado, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Valladolid, Valladolid, 2016. Consultado en: <https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/21560/1/TFG-E-233.pdf>.

MARTÍN VALVERDE, Antonio, RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, Fermín y GARCÍA MURCIA, JOAQUÍN, *Derecho del Trabajo*, Ed. Tecnos, Vigésimoprimera Edición, Madrid, 2012.

MÉNDEZ LÓPEZ, Ilda, *El embargo y su práctica*, Ed. Forum, Oviedo, 1994.

MONTOYA MELGAR, Alfredo, *Derecho del Trabajo*, Ed. Tecnos, 18ª edición, 1997.

MORENO CATENA, Víctor Manuel, “Aspectos más relevantes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento civil en las modificaciones de 2009”, en *Estudios Jurídicos*, 2010.

PEDRAJAS MORENO, Abdón, *El embargo sobre retribuciones (su práctica y sus límites)*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1998.

RÍOS SALMERON, Bartolomé, “La inembargabilidad del salario”, discurso leído el día 4 de diciembre de 1986 en el acto de recepción como Académico de Número por el Excmo. Sr. D. Bartolomé Ríos Salmerón y contestación del Excmo. Sr. D. Alfredo Montoya Melgar, *Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Murcia*, Murcia, 1986.

SANESTEBAN GONZÁLEZ-ACEVEDO, Marta, “El embargo de salarios y pensiones: normativa y jurisprudencia”, Trabajo de Fin de Máster, *Universidade da Coruña, Facultade Ciencias do traballo*, 2016.

## **16. Jurisprudencia**

Sentencia del Tribunal Constitucional 54/1983, de 21 de junio, Pleno [ECLI:ES:TC:1983:54].

Sentencia del Tribunal Constitucional 150/1985, de 5 de noviembre, Pleno.

Sentencia del Tribunal Constitucional 169/1985, de 13 de diciembre, Pleno.

Sentencia del Tribunal Constitucional 171/1985, de 13 de diciembre, Pleno. [ECLI:ES:TC:1985:171].

Sentencia del Tribunal Constitucional 113/1989, de 22 de junio [ECLI:ES:TC:1989:113].

Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 12ª, nº. 229/2005, de 9 de diciembre, rec. 691/2005 [ECLI:ES:APB:2005:5818A].

Auto de la Audiencia Provincial de Zamora, Sección 1ª, nº. 19/2007, de 8 de marzo, rec. 22/2007 [ECLI:ES:APZA:2007:18A].

Auto de la Audiencia Provincial de Castellón, Sección 1ª, nº. 216/2007, de 30 de octubre, rec. 161/2007 [ECLI:ES:APCS:2007:533A].

Sentencia de Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, Sección 7ª, de 11 de octubre de 2004, rec. 1517/2002 [ECLI:ES:AN:2004:6254].

Auto de la Audiencia Provincial de A Coruña, Sección 5ª, nº. 53/2007, de 2 de mayo, rec. 570/2006 [ECLI:ES:APC:2007:87A].

Auto de la Audiencia Provincial de Castellón, Sección 3ª, nº. 87/2008, de 22 de febrero, rec. 647/2007 [ECLI:ES:APCS:2008:222A].

Auto de la Audiencia Provincial de Zamora, Sección 1ª, nº. 55/2011, de 29 de julio, rec. 187/2011 [ECLI:ES:APZA:2011:70A].

Auto de la Audiencia Provincial de Guadalajara, Sección 1ª, nº. 37/2002, de 30 de abril, rec. 127/2002 [ECLI:ES:APGU:2002:17A].

Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 12ª, nº. 824/2005, de 29 de noviembre de 2005, rec. 80/2005 [ECLI:APM:2005:11769A].

Auto de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección 4ª, nº. 119/2000, de 2 de mayo de 2000, rec. 613/1999 [ECLI:APIM:2000:157A].

Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 18ª, nº. 182/2006, de 18 de julio de 2006, rec. 814/2005 [ECLI:ES:APB:2006:5254A].

Auto de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección 4ª, nº. 26/2010, de 24 de febrero, rec. 561/2009 [ECLI:APIB:2010:139A].

Auto de la Audiencia Provincial de Bizkaia, Sección 6ª, nº. 90993/2010, de 15 de noviembre, rec. 510/2010 [ECLI:APBI:2010:1453A].

Auto de la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 2ª, nº. 213/2012, de 11 de octubre, rec. 2823/2011 [ECLI:ES:APSE:2012:3667A].

Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 22ª, de 3 de junio de 2003, rec. 58/2003 [ECLI:ES:APM:2003:1765A].

Auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 2ª, nº. 411/2011, de 12 de julio, rec. 280/2011 [ECLI:ES:APZ:2011:1710A].

Auto de la Audiencia Provincial de Bizkaia, Sección 4ª, nº. 334/2003, de 20 de mayo, rec. 8/2003 [ECLI:APBI:2003:67A]